

Publicado en *Cuadernos del Sur. Sociedad, Economía, Política* 16 (parte I), Bs. As., octubre de 1993, y 17 (parte II), Bs. As., mayo de 1994.

El huevo y la serpiente
(Notas acerca de la crisis del régimen democrático de dominación
y la reestructuración capitalista en Argentina, 1983-1993

Alberto Bonnet

Eduardo Glavich

1. Introducción.

A diez años de su reestablecimiento, el régimen democrático de dominación política atraviesa en la Argentina una profunda crisis. Los corruptos, las patotas, los candidatos cantantes, los dislates discursivos del presidente, los desocupados, los paseantes domingueros de los shoppings y la tortuga del embajador norteamericano, conforman en el imaginario social un panorama carnavalesco que apenas parece descriptible por el realismo mágico latinoamericano. La finalidad de estas páginas, sin embargo, escapa a la literatura. Intentaremos analizar desde una perspectiva socialista las principales características de la gestación y evolución de esta crisis.

La hipótesis que orienta nuestro análisis consiste en afirmar la existencia de *una estrecha relación entre el desarrollo de este régimen de dominación política y los avances y estancamientos contemporáneos del proceso de reestructuración capitalista.*

Algunas experiencias latinoamericanas recientes apuntalan esta hipótesis. El proceso de reestructuración capitalista en México determina modificaciones inéditas en su régimen político. El régimen de dominación autocrático-corporativo, estructurado desde los tiempos de la Revolución Mexicana alrededor del PRI como partido de Estado, se rompe con la formación de una tendencia de derecha liberal (el PAN) y la escisión de una izquierda populista (el Cardenismo), que en 1988 arrancan al PRI el control de numerosos distritos (1). La reestructuración capitalista en Brasil enfrenta la simultánea reorganización del movimiento social y la consolidación de un partido de masas (el PT) nacido en las grandes

huelgas que en 1978-80 enmarcan la caída de la dictadura. Tras el prolongado período de marchas y contramarchas de Sarney, la ofensiva de Collor de Melo en Marzo de 1990 -reforma fiscal y monetaria, congelamiento de precios y salarios, y medidas a largo plazo como la reforma administrativa, el achicamiento del Estado y la apertura externa- enfrenta sucesivas crisis parlamentarias y una resistencia de masas que conducen a su caída y a una inédita crisis del régimen dos años más tarde (2). A estos dos casos, opuestos si atendemos al avance de la reestructuración capitalista en México y su estancamiento en Brasil, podrían agregarse otras experiencias, como el derrumbe de Pérez en Venezuela y el autogolpe de Fujimori en Perú (3).

Analizar la crisis del régimen democrático en la Argentina siguiendo esta hipótesis presupone admitir dos cosas: primero, que *el capitalismo argentino atraviesa un proceso de reestructuración* y, segundo, que *su burguesía mantiene durante los años de democracia la iniciativa en la lucha de clases*. Esto no implica -como veremos más adelante- suponer que la reestructuración avanzó sin contradicciones ni crisis y, menos aún, sin enfrentar la resistencia de los trabajadores y el conjunto de los oprimidos. A menudo, la izquierda argentina combinó en sus caracterizaciones dos errores mutuamente relacionados: una manifiesta ceguera para discernir en medio de las recurrentes crisis las tendencias hacia una reestructuración de largo plazo, con un insólito exitismo en la evaluación de las luchas populares que dichos fenómenos enfrentaron. Estos errores tienen su contracara en la "nueva izquierda" -una manera piadosa de llamar a quienes siguen soñando con un capitalismo civilizado- que, pronta a asumir como una "necesidad objetiva" la reestructuración en curso, ignoran las luchas que la enfrentan o las menosprecian como "resabios del pasado". Nos parece necesario, por ende, precisar ambos supuestos adoptados.

Las políticas económicas de ajuste de comienzos de los años 70 deben distinguirse de las implementadas hacia fines de los 50 y comienzos de los 60, pues responden a coyunturas diferentes de las economías latinoamericanas y mundial. La recesión generalizada de 1974-5 clausura una fase expansiva de la economía mundial abierta en la posguerra y arrastra paulatinamente a las economías capitalistas dependientes de los países latinoamericanos (4). La nueva recesión de 1980-82, con sus dramáticas secuelas para América Latina, tornará irreversible este proceso; pero ya las consecuencias de la anterior crisis habían conducido a la adopción de políticas económicas de ajuste diferentes de las tradicionales. Los ajustes implementados por las dictaduras chilena (1973), uruguay (1974) y argentina (1976)

conjugaron *shocks anti-inflacionarios* de corto plazo (más ortodoxos y recesivos que los anteriores) con *medidas de reestructuración capitalista* a largo plazo (5). Para analizar mediante nuestra hipótesis la realidad argentina, entonces, es imprescindible distinguir entre las reiteradas escaladas inflacionarias y las políticas de shock por un lado, y la crisis estructural del capitalismo y las políticas de reestructuración del mismo por otro. Es cierto que ambos fenómenos están determinados por la lucha de clases y revisten importancia para entender la evolución y la crisis del régimen de dominación política, pero la diferencia entre ellos debe conservarse. Las escaladas inflacionarias son ofensivas expropiatorias del gran capital contra los trabajadores y las fracciones subordinadas de la burguesía, necesariamente coyunturales, y las políticas de shock apuntan a estabilizar la estructura de precios relativos emergente de ellas en vistas de reiniciar el proceso de valorización normal del capital (6). La crisis estructural del capitalismo, en cambio, implica el cierre de una etapa de acumulación, y las políticas de reestructuración intentan cristalizar nuevas relaciones de fuerza entre clases (es decir, recomponer la tasa de ganancia) y fracciones de clase (modificar la distribución de la plusvalía) para abrir una nueva etapa de acumulación. Esta combinación de shocks con medidas de reestructuración de largo aliento puede verse ya en la política económica que Martínez de Hoz encara en 1976. Mediante una política de shock (deshdoblamiento del tipo de cambio, indexación de los ingresos tributarios, reducción de los salarios en un 35%), el ministro detuvo una inflación que había alcanzado un 63% de incremento en los dos meses siguientes a la devaluación de Rodrigo (Junio-Julio, 1975) en un 8% mensual un año después. Pero luego establece un imprevisto congelamiento de precios por 120 días, para implementar una reforma financiera que dispararía las tasas de interés y sería un explosivo factor inflacionario (7). Esta reforma recortaría definitivamente los instrumentos estatales para controlar la inflación y sólo puede explicarse en vistas de su funcionalidad para abrir, especulativamente, el proceso de concentración y centralización de capitales necesario para iniciar una reestructuración del capitalismo argentino que -como veremos más adelante- continuaría con la restauración del régimen democrático.

Estas combinaciones a menudo contradictorias de shocks anti-inflacionarios y medidas de reestructuración capitalista enfrentaron la resistencia de los trabajadores y el conjunto de los sectores por ellas afectados aún durante la dictadura más sangrienta padecida por nuestro país. Los trabajadores argentinos habían acreditado ya su capacidad de resistencia enfrentando a Onganía en el "Cordobazo" de 1969 y, a pesar de las persecuciones

y represión vigentes, volvieron a resistir la nueva ofensiva burguesa. Sabotajes (Fiat, Mercedes Benz, Rigoleau), huelgas locales (General Motors, Ford, Chrisler, Volcán, Atma, Crónica, Bonafide, Prati-Fruhehauf, Good-Year, Fiat) y conflictos nacionales como el de Luz y Fuerza, enfrentaron a la dictadura ya en 1976 (8). Sin embargo, aquellas eran luchas defensivas ante el deterioro generalizado de las condiciones de vida derivado de las políticas de shock. La iniciativa política -es decir, el correlato político de la ofensiva reestructuradora- quedó en manos de la burguesía a través de las Fuerzas Armadas, los partidos políticos tradicionales y la burocracia sindical, y esto no cambiaría con el reestablecimiento del régimen democrático.

Los trabajadores fueron el sector más afectado por esta reestructuración, aunque no el único. Los pequeños y medianos empresarios sufrieron un intenso proceso de concentración y centralización del capital, inherente a la reestructuración en marcha, que redujo sus porcentajes de participación en la producción industrial a 7,15 y 24,05% del total hacia 1983, respectivamente. La burguesía agropecuaria sufrió la caída del precio de sus productos y la supresión de los créditos subsidiados (los precios agrarios pampeanos de la cosecha de 1980-81 fueron los más bajos en décadas y los precios ganaderos de 1978-81 impusieron una reducción igualmente histórica de stocks). Reconocer la existencia de sectores de la propia burguesía afectados por la reestructuración capitalista permite diferenciar las fracciones beneficiadas por la misma y que continuarían impulsándola en adelante. Nos referimos a los denominados "capitanes de la industria" o "grandes grupos económicos" (y también, secundariamente, a empresas transnacionales) como Perez Companc, Bunge y Born, Techint, Garovaglio y Zorraquín, Astra y Celulosa Argentina. Estas organizaciones existían con anterioridad a la dictadura y estaban vinculadas, en algunos casos, a grandes proyectos aprobados a comienzos de los 70, pero adquirieron en tiempos de la dictadura su configuración actual como conglomerados integrados y/o diversificados en diversas ramas de la producción agropecuaria e industrial, oligopólicos en sus mercados locales y capaces de ingresar competitivamente en el mercado mundial, estrechamente vinculados al Estado como proveedores o beneficiarios de la promoción industrial y otras prebendas, y consolidados mediante la especulación financiera (9). Es decir, la *gran burguesía monopolista*, que condicionaría permanentemente la evolución posterior del régimen democrático en Argentina.

Ahora bien, el proceso de reestructuración capitalista determinará la evolución y crisis del régimen democrático de dominación a través de una serie de factores que -para evitar interpretaciones economicistas- conviene discernir. En primer lugar, *factores sociales*, que ponen claramente de manifiesto el carácter de clase de la reestructuración (deterioro del salario real y de las conquistas sociales, incremento de la desocupación, modificaciones en la composición de la clase obrera, así como el aumento resultante de la explotación y las modificaciones en la composición de la burguesía). En segundo lugar, *factores políticos*, que corresponden a las distintas formas de implementación de la reestructuración y de las resistencias que enfrenta (fundamentalmente, las vías democrático-burguesa y autoritaria que asume dicha reestructuración durante el alfonsinismo y el menemismo, y las correspondientes respuestas que ambas generan). Finalmente, en tercer lugar, *factores ideológicos* que, enmarcando estas distintas formas de implementar la reestructuración, encubren sus contenidos de clase (las ideologías "democratizante" y "pragmatista" del alfonsinismo y el menemismo). La reestructuración capitalista determinará la evolución y crisis del régimen democrático de dominación, por ende, a través de un complejo entramado de factores sociales, políticos e ideológicos: seguidamente intentaremos analizar, orientados por esta hipótesis, los lineamientos generales de aquella evolución y crisis del régimen democrático.

2. El Restablecimiento del régimen democrático.

El Proceso de Reorganización Nacional encaró a partir de 1976 una serie de iniciativas que apuntaban a transformar el capitalismo argentino económica, social y políticamente. Sin embargo, a comienzos de 1981 estas iniciativas enfrentaron serios obstáculos. En el plano económico, la liquidación del BIR y otros importantes bancos y financieras locales había desatado a comienzos del año anterior una primera corrida financiera que había sido frenada garantizando estatalmente los depósitos. Pero la estabilidad de la economía había sido dejada en manos de los "operadores financieros" -es decir, de los grandes capitales monopolistas- y las expectativas acerca de una modificación en la política cambiaría por el equipo que asumiría a comienzos de 1981 (Viola-Sigaut) desató una deserción masiva de ahorristas hacia la compra de dólares, una acelerada merma de las

reservas, una creciente emisión monetaria y un aumento del endeudamiento externo, en un contexto internacional de profunda crisis. A partir de esta coyuntura, la dictadura perdería paulatinamente el rumbo (10). Tras sucesivas devaluaciones, a fines de 1981 la situación se descontroló y asumió Galtieri con la misión de profundizar la ofensiva burguesa iniciada por Martínez de Hoz (Aleman en economía) y relegitimar a la dictadura ante una creciente resistencia popular (guerra de Malvinas).

En el plano social, la resistencia de los trabajadores se había incrementado a raíz del deterioro de los salarios y de los despidos causados por la recesión y las quiebras. Ya en Abril de 1979, "los 25" (el ubaldinismo) habían convocado la primera huelga general de la dictadura, y ésta estableció una legislación (ley 22.105, de Asociaciones Profesionales) para regular las actividades sindicales e inició tratativas con la burocracia sindical. La serie de conflictos desatados desde entonces en frigoríficos, textiles, bancarios, metalúrgicos -algunos de los cuales ya empezaban a incluir ocupaciones de fábricas y movilizaciones y a sumar la solidaridad de otros gremios y sectores de la comunidad- culminaron en la jornada nacional de protesta convocada por la CGT-Brasil en Julio de 1981 y la misa por los desocupados, convertida en protesta bajo la consigna de "paz, pan y trabajo", de Noviembre del mismo año. La lucha de las Madres de Plaza de Mayo por la aparición con vida de los desaparecidos y el juicio a los culpables de la represión ganó una nueva dimensión y el movimiento estudiantil comenzó a enfrentar los aranceles y cupos de la Universidad. Estos acontecimientos significaron un importante avance en la resistencia contra la dictadura, a raíz de su masividad y de la incipiente convergencia entre reivindicaciones económicas y democráticas. Sectores de la propia burguesía (SRA, FAA, UIA, CAP, etc.) y la Iglesia Católica, que habían apoyado a la dictadura, comenzaron también a plantear disidencias. Huelgas y movilizaciones posteriores culminaron en otra jornada nacional de protesta en Marzo de 1982 que concluyó con una marcha hacia Plaza de Mayo prohibida y duramente reprimida por los militares.

Dos días después, la dictadura invadió las Malvinas y se inició una etapa en la que se aceleraría su descomposición. El emprendimiento de esta criminal aventura bélica respondió, sin duda, a profundas motivaciones económicas y estratégicas muy anteriores (la posibilidad de explotar las dos cuencas petroleras ubicadas cerca de las islas, de obtener sustento legal para demandar el sector antártico y de convertir a las Fuerzas Armadas locales en gendarmes militares del AtlánticoSur, en alianza con los EEUU y Sud África), pues los primeros planes

de invasión se remontaban a 1977. Empero, la decisión puntual de invadir las islas ese trágico 2 de Abril respondió a motivaciones más coyunturales: la necesidad de relegitimar socialmente a la dictadura y negociar una transición a largo plazo controlada por ella (12). Los militares argentinos volvían derrotados dos meses después, asumía un nuevo presidente y se anunciaba el reestablecimiento del régimen democrático.

Analizar adecuadamente el período de transición abierto tras la derrota de Malvinas reviste suma importancia para comprender las características del régimen democrático que entraría en vigencia desde fines de 1983. Dos procesos son determinantes en este período: las movilizaciones sociales por abajo y las negociaciones de los partidos burgueses y la burocracia sindical por arriba (13). Las movilizaciones de los trabajadores (portuarios, tranviarios, ferroviarios, empleados públicos, docentes), las huelgas generales (23/9, 6/12/82 y 28/3/83), las protestas de los desocupados (las "ollas populares" y marchas a San Cayetano), de las amas de casa (marcha de las "bolsas vacías") y de los soldados ex-combatientes de Malvinas, las actividades de los organismos de derechos humanos (campañas de firmas, recursos judiciales, marcha de la resistencia) y las movilizaciones democráticas (marcha por la democracia de la Multipartidaria y marcha de repudio al "Documento Final" de la dictadura), constituyeron los principales acontecimientos que testimonian un alza de la resistencia contra el régimen. Las negociaciones que iniciaron a comienzos de 1983 la Multipartidaria y las dos CGT con la dictadura, sin embargo, tendieron a encauzar esta resistencia dentro de los límites aceptables para la burguesía. Desde Marzo de 1981, la Multipartidaria reunía a los principales partidos burgueses (UCR, PJ, PI, PDC y MID), los que habían mantenido su complicidad con la dictadura apoyándola desde el golpe de 1976 hasta la invasión de las Malvinas en 1982, incluida la "guerra santa" librada por los militares contra miles de militantes populares. La CGT se había reorganizado ilegalmente a fines de 1980 (futura CGT-Brasil de Ubaldini), pero en Mayo de 1982 se escindía una línea "participacionista" (la CGT-Azopardo de Triaca), es decir, conciliadora con la dictadura (14). La Multipartidaria y la burocracia sindical fueron arrastradas (desde la derrota de Malvinas -Junio del 82- hasta el comienzo del proceso democratizador -Marzo del 83-) por las movilizaciones, pero iniciado 1983 empezaron ambas a implementar una política sumamente conciliadora. La Multipartidaria apoyó a Bignone y comenzó a boicotear las movilizaciones (Marcha contra el "Documento Final"), los dos principales partidos

políticos burgueses (PJ y UCR) acordaron con sectores de las Fuerzas Armadas, divididas por la crisis, y comenzaron las campañas electorales.

La organización y movilización de los trabajadores y amplios sectores de la pequeñoburguesía se habían ampliado de manera considerable desde mediados de 1982, pero no habían alcanzado a madurar hasta sentar las bases de una alternativa diferente a la burocracia sindical y a los partidos políticos heredados. La izquierda política, diezmada materialmente por las persecuciones y asesinatos y paralizada ideológicamente por sus propias convicciones -desde las que condujeron a los comunistas a dar un "apoyo crítico" a Videla y su comercio de granos con la URSS hasta las que impulsaron a los trotskistas a apoyar a Galtieri en su aventura de las Malvinas-, poco podía aportar para la construcción de aquella alternativa.

El reestablecimiento del régimen democrático de dominación en Argentina quedaría determinado por esta situación. No se trataría propiamente de una transición supervisada por las Fuerzas Armadas como acontecería en Chile, donde los éxitos parciales de la reestructuración capitalista emprendida por A.Pinochet le permitirían conservar una amplia base social burguesa y pequeñoburguesa y gravitar fuertemente en la transición, porque las Fuerzas Armadas argentinas dejaron sus puestos muy desprestigiadas ante el conjunto de la comunidad. Tampoco podría asimilarse -naturalmente- con una transición democrático-revolucionaria, como en los casos de las caídas de las dictaduras oligárquicas mexicana, boliviana y cubana décadas antes, o cualesquiera casos semejantes (15).

La burguesía conservaría la iniciativa reestructuradora abierta durante la dictadura, encauzando la restauración del régimen democrático a través de sus partidos e instituciones. Pero se vería obligada a realizar importantes concesiones que obstaculizarían por largos años aquella reestructuración.

3. 1983-1989: El desarme de la democracia.

La reestructuración capitalista había alcanzado algunos éxitos parciales: la imposición de un fuerte incremento en la tasa de explotación del trabajo era el primero, el inicio de una reconversión del aparato productivo el segundo. La dictadura, en verdad, había

implementado la primera tarea del proceso reestructurador: la cristalización de una nueva relación de fuerzas que favorecía a la burguesía -en particular, la gran burguesía monopolista- y subordinaba a los trabajadores. La crisis de 1981 y los hechos posteriores habían impedido, sin embargo, iniciar una nueva etapa de acumulación. Esta tarea quedaría pendiente. El reestablecimiento del régimen democrático asumiría la forma general -invirtiendo la sentencia de Clausewitz- del reestablecimiento de una política que siguió siendo aquella guerra de la dictadura por otros medios. Pero es necesario atender a los matices. Los partidos burgueses que conformaron la Multipartidaria condujeron la restauración del régimen democrático, pero sólo pudieron encauzar las expectativas que el pueblo depositaba en dicha restauración operando modificaciones en sus anteriores perfiles y otorgando importantes concesiones democráticas. El amplio triunfo que la Unión Cívica Radical obtuvo contra el Partido Justicialista en las elecciones de Octubre de 1983 fue un acontecimiento inédito (la primera elección sin proscripciones que la UCR ganara al peronismo) que solamente puede explicarse a partir de la capacidad política demostrada por los radicales para modificar su perfil anterior -es decir, de complicidad con la dictadura- y aparecer como único representante de los valores democráticos frente a amplios sectores de la pequeñoburguesía y aún de los trabajadores (16). Esta capacidad radicó, sin duda, en que la UCR era un partido democrático-burgués a la manera tradicional. Es decir, principalmente, un partido que sustenta su legitimidad interna en votaciones periódicas de sus afiliados y su legitimidad externa interpelando abstractamente a los votantes como ciudadanos argentinos. Estos rasgos le permitieron modificar internamente su perfil con la victoria de la línea "Renovación y Cambio" liderada por Alfonsín y canalizar externamente amplias expectativas democráticas vaciándolas de contenido. El PJ, en cambio, era un movimiento legitimado internamente por la conducción personal de un líder (que había muerto) y externamente por la convocatoria masiva de las clases y fracciones de clase consideradas como "nacionales y populares". Estos rasgos dificultaron la modificación de su perfil, reduciendo su capacidad de canalizar las expectativas democráticas ante las elecciones.

La UCR apareció como representante de la democracia pagando un precio relativamente bajo: renovando parte de su dirigencia y aggiornando su discurso. Contín, De La Rúa, Perette, Tróccoli y otras figuras semejantes fueron dejadas de lado en la confección de las listas de candidatos, Balbín e Illia fueron canonizados, respectivamente, como un

baluarte del pluralismo (abrazo con Perón de 1974) y un convencido demócrata víctima del autoritarismo (golpe de 1966), y una nueva generación de dirigentes (Storani, Moreau, Stubrin, Suarez Lastra, Nosiglia, Rodríguez) fue ascendida a puestos claves. Los discursos electorales de Alfonsín respondían a una matriz sencilla pero efectiva: contraponían el valor "democracia" al disvalor "caos", identificando al primero con la UCR y al PJ con el segundo. La noción formal de democracia (recuérdese las lecturas del Preámbulo de la Constitución que Alfonsín reiteraba al cerrar sus discursos) se asociaba arbitrariamente con amplios contenidos económicos y sociales ("con la democracia se come, se educa, se cura"). La noción de "caos" sintetizaba a su vez contenidos diversos, desde el "pacto militar-sindical" de Miguel hasta alusiones veladas a los acontecimientos del último gobierno peronista que habrían causado el golpe del 76 (triple A, subversión, desgobierno). Así, el discurso alfonsinista (acompañado por la prensa) recuperaba en buena medida tradicionales motivos "gorilas" del 55, pero éstos inducirían respuestas diferentes en el contexto posdictatorial de 1983. Las propias actitudes de la conducción del PJ en la campaña, por su parte, parecían confirmar aquella imagen (17). Basta comparar los masivos actos de cierre de campaña para ilustrar esta situación: *La Nación* (27 y 29/10/83) exponía minuciosamente, al día siguiente de cada acto, los disturbios protagonizados por los seguidores de Luder y la quema del ataúd con la inscripción "Alfonsín q.e.p.d." por Iglesias (quien, junto a Miguel, aparecía fotografiado "custodiando" a Luder), mientras los seguidores de Alfonsín aparecían escuchando pacíficamente el Preámbulo.

El perfil "democratizante" adoptado por el alfonsinismo durante la campaña explica su triunfo en 1983, pero esto no significa que se tratara de una mera táctica electoral para la coyuntura. Antes bien, *el gobierno alfonsinista pondría en práctica una serie de políticas tendientes a democratizar diversos aparatos de estado y organizaciones sociales*. Entre ellas se encuentran la derogación del decreto de autoamnistía de la dictadura (9/82) y el inicio del juicio a los responsables de las torturas y desapariciones, medidas que apuntaban explícitamente a democratizar las Fuerzas Armadas; la legislación enviada al Congreso en Marzo de 1984 para la democratización de los sindicatos y rechazada en el mismo; el Plan Nacional de Alfabetización, el Programa Alimentario Nacional y el Congreso Pedagógico, que apuntaban a modificar las pautas en educación, alimentación e higiene mediante la participación de los sectores afectados; la normalización de las universidades, derogando las restricciones al ingreso y los aranceles y restaurando el cogobierno y los concursos; e

iniciativas locales como el Programa Cultural en Barrios de la MCBA. Estas políticas fueron acompañadas por la *difusión de un discurso ideológico democratizante y participacionista*, cuya elaboración reuniría alrededor del alfonsinismo una corte de intelectuales que, alineados en la izquierda antes de la dictadura, habían desertado arrepentidos de sus filas (18).

Estas políticas y discursos democratizantes apuntaban a construir una nueva hegemonía burguesa relativamente estable sustentándose en la herencia de la dictadura, a saber: una amplia derrota de los movimientos sociales iniciados en los 60 y el resurgimiento de las reivindicaciones democráticas básicas en el ocaso de la dictadura. La nueva hegemonía en cuestión ya había sido presentada por Alfonsín durante la campaña electoral -como el "tercer movimiento histórico"- y aparecía como empresa a concretar paulatinamente debido a la importante porción de poder político que el PJ había obtenido en las elecciones (19) y al peso que conservaban la burocracia sindical, las Fuerzas Armadas y los sectores opositores de la UCR. La construcción de esta nueva hegemonía era una meta central del alfonsinismo debido al modo particular con que intentaría articular dicha hegemonía política con la solución de problemas económicos y sociales. En efecto, condicionado por una notable ignorancia de las profundas transformaciones económico-sociales realizadas en la dictadura, de la gravedad de la crisis económica y del contexto internacional, de un lado, y por los intereses sociales que la UCR representaba y las consecuentes limitaciones político-ideológicas propias, del otro, el gobierno alfonsinista enfrentaría los problemas mediante una suerte de "politicismo abstracto" que requería una hegemonía democráticamente consensuada (20). Alfonsín decía en este sentido: "el equilibrio democrático supone igualmente la subordinación de la economía a los propósitos políticos que lo inspiran" (discurso en la Central de Trabajadores Venezolanos el 15-1-83, publicado en *Entrelíneas* Nro.17, Marzo de 1983).

La designación de Grinspun en economía y las medidas que implementó resultan ahora comprensibles. La crisis económica iniciada a comienzos de los años 80 seguía agravándose: una marcada inestabilidad inflacionaria que venía acelerándose, se agregaba a los desequilibrios estructurales (estancamiento en la producción, desempleo y subempleo, déficit inmanejable en el balance de pagos) (21). Grinspun aplicó medidas de ajuste gradualistas, manejando salarios, tipos de cambio, tasas de interés y tarifas como variables, y evitando medidas más profundas. Esta política chocaría casi inmediatamente con las

presiones del FMI, en un acontecimiento que simbolizaría las visciditudes posteriores del alfonsinismo. A propósito de las primeras tratativas con el FMI, Alfonsín declaraba: "no deberíamos considerar como un enemigo al Fondo Monetario Internacional ya que nos da créditos; pero no queremos aceptar esta fórmula recesiva y por lo contrario, deseamos que el país crezca, aumentar los salarios y combatir así la inflación" (*La Nación*, 4-6-84). La restauración *per se* del régimen democrático -siguiendo las ilusiones politicistas del presidente- permitiría reinsertar al país en el mercado mundial y mejorar las condiciones de negociación con los organismos financieros internacionales. Unos meses después, el FMI impuso al gobierno un shock anti-inflacionario (con devaluación, ajuste de tarifas y restricción monetaria) que ocasionó una mayor recesión y una abrupta caída del salario. *Las limitaciones materiales de la política democratizante del alfonsinismo comenzaban a ponerse de manifiesto seis meses después de su arribo al gobierno*. Mientras tanto, durante Noviembre-Diciembre y Marzo-Abril, comenzaron a producirse importantes luchas obreras contra la abrupta caída del salario (22).

El shock monetarista, sin embargo, no detuvo la inflación -que se incrementó un 303% (IPC, año base 1974) entre Enero y Junio de 1985. El gobierno implementó entonces un nuevo shock anti-inflacionario complejo, prolongado, y reajustado varias veces: el Plan Austral, a cargo de un nuevo equipo económico encabezado por Sourouille. El Austral, negociado antes con el FMI y la Reserva Federal por Machinea y Broderson, combinaba medidas fiscales, monetarias y cambiarias con congelamiento de los salarios, precios industriales y tipo de cambio (reunión de medidas calificada como "heterodoxa" y aún como "neutral" por los alfonsinistas, para ocultar su carácter reaccionario) y fue monolíticamente apoyado por la burguesía (UIA, ADEBA, SRA). Los trabajadores, naturalmente, pagaron el ajuste (el costo salarial para la industria se redujo un 26,7% entre fines de 1984 y fines de 1985)(23).

Los resultados iniciales del Plan Austral (reducción de la inflación a un 3% mensual promedio para Julio-Diciembre de 1985 y del déficit fiscal a un 6%, y recuperación temporaria de la producción y la inversión) permitieron al alfonsinismo imponerse sobre el peronismo en las elecciones para renovar diputados de Noviembre de 1985 (24) y lanzar iniciativas tales como la reforma constitucional y el traslado de la Capital Federal a Viedma. Sin embargo, hacia 1986 aparecerían los primeros problemas.

El balance de pagos empeoraba desde fines de 1985 (-952 millones de dólares para 1985, -2859 para 1986, -4239 para 1987) debido a los pagos de la deuda externa, el deterioro de los términos de intercambio y una caída en las exportaciones agropecuarias debida a inundaciones. Durante 1984-1986, entonces, la relación intereses de la deuda/exportaciones aumenta hasta un promedio de 61,4% (25). Este problemático panorama fue enfrentado por el alfonsinismo, una vez más, mediante su politicismo abstracto: con protestas externas contra el proteccionismo de la CEE y con medidas internas, principalmente tributarias, negociadas con la gran burguesía monopolista. Las pautas establecidas en el Austral fueron suspendiéndose conforme se intensificaban las presiones de las diferentes fracciones de la burguesía sobre la estructura de precios relativos. Desde comienzos de 1986, además, hubo una importante alza en la lucha de los trabajadores por salarios, despidos y condiciones de trabajo (acompañada por cuatro huelgas generales de la CGT, adscripta a la "renovación" peronista) que impuso al gobierno paritarias limitadas a mediados de 1986, desbordadas más tarde por aumentos a los metalúrgicos que desencadenaron las presiones de otros sindicatos. El alfonsinismo negoció entonces con los sectores de la burocracia que había denunciado como miembros del "pacto militar-sindical" (la UOM del ortodoxo Miguel), pero el acercamiento político de "los 15" posibilitó nuevas negociaciones que culminaron con el nombramiento de Alderete como Ministro de Trabajo en 1987. Hacia fines de 1986 tuvo lugar la primera corrida (aumento del dólar paralelo) y el alfonsinismo comenzó a perder paulatinamente el rumbo.

Es interesante advertir cómo estas crisis desnudan la faceta oculta del discurso democratizante alfonsinista. En Parque Norte (Diciembre de 1985), Alfonsín había propuesto "la idea de pacto democrático, esto es, de un compromiso que, respetando la autonomía de los actores sociales, defina un marco global compartido dentro del cual los conflictos puedan procesarse sin desembocar en el caos y las diferencias coexistan sin disolverse". En Villa Regina (Enero de 1986, 5 días antes de realizarse la primera huelga general contra el Austral), subrayaba: "no puede ser, de ninguna manera, que levantemos por encima de los intereses nacionales los intereses partidistas" y denunciaba explícitamente a los partidos de izquierda como "aventureros que conspiran contra la democracia".

A comienzos de 1987, Alfonsín sancionaba la "Ley de Punto Final" para mejorar las relaciones del gobierno -deterioradas por el desarrollo de los juicios y las primeras condenas- con las Fuerzas Armadas. *Comenzaban a ponerse de manifiesto las limitaciones*

jurídico-formales de la política democratizante del alfonsinismo. La sublevación militar de Semana Santa de 1987 -encabezada por Rico y otros "héroes de Malvinas", en palabras del presidente- sería superada por Alfonsín mediante una nueva medida aún mas vergonzosa que la anterior: la "Ley de Obediencia Debida", que libraba de responsabilidad a la mayoría de los militares culpables de torturas y asesinatos de luchadores populares durante la dictadura. En medio de una nueva escalada de luchas obreras, se realizaron en Septiembre de 1987 las elecciones para renovar diputados y gobernadores provinciales. Reorganizado por la conducción "renovadora" de Cafiero -que había vencido a los dirigentes peronistas responsables de la derrota de 1983 y cuyo perfil, paradójicamente, se acercaba al alfonsinista- el PJ se impuso con un 41% de los votos, contra un 37 para el radicalismo, a pesar de haber intentado ampliar su base mediante el acuerdo con "los 15" y otras medidas (26). A partir de aquí, una serie de iniciativas alfonsinistas tendientes a acelerar la reestructuración capitalista -reforma laboral y privatizaciones de empresas públicas incluídas- será bloqueada en el Congreso por el peronismo.

Estas elecciones pondrían de manifiesto una inflexión en la evolución política del período, estrechamente vinculada con la crisis del Austral: el alfonsinismo retrocedería como corriente y sería vencido en 1988 por Angeloz -que había triunfado en Córdoba-; el cafierismo -victorioso ante Casella, hombre de Alfonsín- sería derrotado por Menem el mismo año; y la UCD aparece como una alternativa de derecha con cierta importancia en las elecciones (5,7% de los votos). Tenía lugar un giro a derecha en el espectro político.

Durante 1986, la inflación acumulada había bajado a 73,7% (IPC, año base 1974), manteniéndose en cifras razonables en 1987. Pero hacia 1988 vuelve a dispararse para alcanzar en Agosto un incremento acumulado del 254,7%. El reajuste del Austral (el llamado "Plan Primavera") implementado entonces, iniciada ya la campaña para las elecciones presidenciales de 1989, reviste una particular importancia para comprender el colapso final del alfonsinismo y el ascenso posterior del menemismo. El Primavera fue un acuerdo desindexatorio con los grandes capitales monopolistas que, además, incluía un desdoblamiento del tipo de cambio. Es decir, era un ajuste atado de pies y manos a la voluntad de la gran burguesía y los organismos financieros internacionales -que comenzaban a distanciarse del gobierno (*El informador público*, 5/8/88).

La represión desatada en la marcha de la CGT del 9/9/88, la sublevación carapintada de Monte Caseros en Diciembre del mismo año -base del futuro indulto a los genocidas-, el

asalto al Regimiento de La Tablada en Febrero de 1989 por un grupo de militantes -motivados por la supuesta gestación de un golpe militar- que fueron ferozmente reprimidos por las fuerzas de seguridad, son tres hechos que parecen poner la situación política fuera del control del gobierno. La respuesta de Alfonsín fue la creación del COSENA -con los Jefes de Estado Mayor y de la SIDE- el envío al Parlamento de una ley anti-terrorista y la sanción del decreto 327 que faculta al Poder Ejecutivo para convocar a las FFAA para la represión de actos considerados subversivos (Clarín, 19-3-89). En Mayo de 1989, una inflación del 80% mensual, un salario de 20 dólares y un desempleo y subempleo del 15% arrojaron a la población de los suburbios de Rosario y Buenos Aires a una acción desesperada e inédita: el asalto a los supermercados. La respuesta del gobierno arrojó -siguiendo cifras oficiales- 14 muertos, 80 heridos, cientos de detenidos y persecuciones y encarcelamiento de militantes de izquierda considerados como "agitadores" y responsables directos de los saqueos, una vez decretado el estado de sitio.

El bloqueo del financiamiento internacional por el FMI y el Banco Mundial a raíz de la moratoria de hecho en que el país incurriera desde Abril de 1988, redujo las reservas del Banco Central necesarias para sostener el tipo de cambio. En una nueva corrida cambiaria (el 6/2/89), los grandes capitales diezmaron las reservas de un gobierno que se vio obligado a retirarse del mercado de divisas, iniciándose un proceso hiperinflacionario. La inflación, que había sido reducida a alrededor de un 7% a fines de 1988, aumenta geométricamente a 9,6% en Febrero, 17% en Marzo, 33,4% en Abril, 78,4% en Mayo y 114,5% en Junio del año siguiente. El gobierno pierde así el control de la economía en manos de los grandes capitales: se suceden los ministros de economía (Rodríguez y Pugliese), se adelantan las elecciones para el 14 de Mayo, la UCR es ampliamente derrotada por el PJ, y Alfonsín se ve obligado a renunciar a la presidencia en Julio.

La caída del alfonsinismo reviste suma importancia para analizar la evolución y crisis del régimen democrático en la Argentina. La política económica implementada entre 1984 y 1989 se compuso de *sucesivos ajustes anti-inflacionarios, cada vez más severos para los trabajadores*: la desocupación y la subocupación aumentaron de 4,1% y 6,1%, respectivamente, en 1984, a 6,1% y 7,9% en 1988, alcanzando sumadas récords del 14% para 1988 y 16% para Abril de 1989, superiores a los de la dictadura. Los salarios cayeron de manera constante durante el período, desde 136,6 en 1984 (1983=100) a 91,8 en 1989, alcanzando el récord para toda Latinoamérica de u\$s 20 en Mayo de 1989. Esta degradación

del nivel de vida de los trabajadores sería acompañada por un prolongado auge de sus luchas y una cierta recomposición de sus vanguardias y la izquierda.

Sin embargo, *esta política económica no avanzó, con medidas más profundas, en la reestructuración capitalista*. Cuando el Plan Austral comenzó a chocar con los primeros inconvenientes y la UCR perdía parte del poder político conquistado en la transición (es decir, hacia la segunda mitad de 1987), el alfonsinismo lanzó las primeras medidas concretas hacia una "modernización" -nombre dado por los alfonsinistas a la reestructuración. La presión de los grandes capitales monopolistas -a quienes la política económica alfonsinista entregara, desde el comienzo, las condiciones reales de su éxito- comenzaba a sentirse muy claramente. "Cuando el gobierno se puso nervioso por la demora en las inversiones prometidas, los Grupos cambiaron de conversación. Hablemos del Estado, propusieron" escribe gráficamente Verbitsky (*Página 12*, 10-7-88). Liderados por Terragno, los radicales enviaron al Congreso una serie de medidas (nueva ley de coparticipación de impuestos, venta del 40% de Aerolíneas Argentinas, reforma de regímenes de promoción industrial, desregulación en materia petrolera, apertura a las importaciones, desregulación comercial en siderurgia, papel y petroquímica), pero las limitaciones políticas derivadas de la crisis impidieron la concreción de la mayoría de estas iniciativas. Las iniciativas que efectivamente fueron concretadas llevaron los nombres de quienes conducían el rumbo económico: Techint en Siat y Fábrica Argentina de Material Aeroespacial, Pescarmona en Austral, Pérez Companc en Siam, etc. El alfonsinismo entregaba por entonces la economía (y la política) a los grandes capitales monopolistas locales que luego tomarían en sus manos, sin más mediaciones, el gobierno.

Esta entrega de la economía fue acompañada de procesos políticos e ideológicos que deben remarcarse. La política abstractamente democratizante desarrollada durante los dos primeros años de gobierno, y su correspondiente ideología, contribuirían a vaciar de contenido las reivindicaciones democráticas nacidas en la resistencia a la dictadura, y pondría de manifiesto su contenido concreto de clase una vez consumado dicho vaciamiento. Mientras la política de ajuste supuestamente "neutral" aparecía cada vez más como una nueva ofensiva de los grandes capitales, se degradaba el nivel de vida de los trabajadores, se limitaban los plazos y el número de los procesos a los torturadores y asesinos de militantes populares, se mataba y encarcelaba en los barrios a quienes robaban alimentos. El

alfonsinismo no pudo avanzar en el proceso de reestructuración del capitalismo pero, como gobierno de transición, realizó con éxito una tarea previa: el desarme de la democracia.

El alfonsinismo había madurado un huevo, ahora nacería la serpiente: el menemismo instaure una dictadura del capital y acelere la reestructuración capitalista en curso.

(Segunda parte)

Anotábamos, en la primera parte de este artículo, que la hipótesis que orienta nuestro análisis consiste en sostener la existencia de una estrecha relación entre el desarrollo y crisis del régimen democrático de dominación y los avances y estancamientos del proceso de reestructuración capitalista.

El menemismo, partiendo del desarme de la democracia logrado por el alfonsinismo, acelerará la reestructuración económica del capitalismo argentino y profundizará así la crisis del régimen de dominación política.

4. 1989-1993: La dictadura del capital.

La amplia victoria de la fórmula Menem-Duhalde en las elecciones de 1989, con un 46% de los votos contra un 36% para la de Angeloz-Casella, resulta claramente explicable debido a la coyuntura (27). La UCR combinó un perfil volcado a la derecha con la vieja matriz discursiva que contraponía "democracia" y "caos", asociados ahora con las figuras del modernizante gobernador de Córdoba y del populista caudillo de La Rioja, respectivamente. Este perfil apenas alcanzaría para sumar los temores propios de los sectores medios detrás de sus candidaturas. El PJ adoptó, por el contrario, un perfil nacionalista y populista (combinado con claros "guiños" a la gran burguesía (28) bastante inconsistente, aunque apropiado para la situación social vigente desde la hiperinflación de principios de 1989. Los programas y grandes actos estuvieron ausentes durante la campaña. Tras lanzar variados desatinos, los asesores de Menem le prohibieron incluso discursar en público y participar en debates de televisión. Los grandes actos de la campaña de 1983 (800.000 personas en cierres de campaña, según cifras DyN y oficiales) se redujeron a los pequeños actos barriales

y los paseos del "menemóvil". El candidato peronista triunfó -en semejante contexto de desmovilización- sumando las esperanzas de mejores niveles de vida de los sectores más golpeados por la crisis mediante *slogans* como el "salariozo", la "revolución productiva" y la "moratoria de la deuda". Días más tarde, el nuevo gobierno peronista inauguraba la política económica más reaccionaria de la historia argentina, con transformaciones estructurales que dismantlarían las conquistas sociales obtenidas por el movimiento obrero en los primeros gobiernos peronistas. "Si yo llegaba a decir en la campaña electoral todo lo que iba a hacer, la gente no me votaba", declaró Menem más tarde (citado en *La Maga*, 9-6-93). Indudablemente, este descomunal engaño a las masas que depositaron en Menem sus expectativas de progreso social constituye un verdadero atentado contra la democracia, aún entendida a la manera burguesa. Sin embargo, conviene volverse sobre algunos elementos previos. Hay datos que permiten conjeturar la existencia de negociaciones entre los grandes capitales monopolistas y los asesores de Menem en los tiempos de hiperinflación previos a la asunción del nuevo gobierno. Cavallo decía entonces: "ustedes no saben qué es la hiperinflación. Creen que la hiperinflación es como dicen Sourrouille o Alsogaray cuando la inflación pasa varios meses seguidos del 30%. No, la hiperinflación es otra cosa, totalmente distinta y ya la van a conocer" (en Página 12, 21/5/89). Y sugería rechazar los acuerdos de gobernabilidad con el alfonsinismo en retirada, para que el agravamiento de la crisis ampliara el consenso alrededor del nuevo gobierno para aplicar medidas recesivas. Los grandes capitales que originaran las corridas cambiarias -y los "comunicadores sociales" que las seguían e incluso anticipaban- tendrían una importancia central durante el menemismo.

En 1989 la economía presentaba un enorme déficit fiscal y una gran fuga de capitales: se requería -como diría Triaca para El cronista comercial- "cortar de un sólo golpe todos los males de la crisis y comenzar la reconstrucción del capitalismo argentino".

Las designaciones de ministros y asesores, empero, fueron las primeras decisiones públicas que pondrían de manifiesto el rumbo adoptado por el menemismo. Menem escogería a Triaca, sindicalista plástico que había fundado la CGT-Azopardo para negociar con la dictadura, como ministro de trabajo. Sumaría además figuras extrapartidarias en puestos claves mediante un acuerdo con la UCeDé (A.Alsogaray como asesor en temas de la deuda externa, M.J.Alsogaray como interventora de Entel). Y, especialmente, no seleccionaría como ministro de economía a un tecnócrata entre tecnócratas, sino a un empresario entre grandes empresarios. La oferta incluía a O.Vicente (Pérez Companc),

C.Tramutola (Techint), F.Macri (SOCMA) y M.Roig (Bunge y Born), y la elección recayó sobre este último. Bunge y Born es uno de los mayores y más antiguos monopolios de la Argentina (Bunge y Born, Grafa, Molinos, Compañía Química, Atanor, Centenera) y un símbolo de los "vende-patrias" para el peronismo tradicional. Nacido en la comercialización de granos y consolidado financieramente durante la dictadura en tanto uno de los mayores deudores y beneficiarios de la estatización de la deuda, favorecido además por alrededor de u\$s 1.000 millones anuales de promoción industrial con Grafa-San Luis y Grafalar-La Rioja y como contratista del Estado en la dictadura y el gobierno radical, se había convertido en un gigante multinacional de la agroindustria.

El hombre de Bunge y Born -reemplazado luego por su par Rapanelli- anunció en Julio de 1989 un duro shock anti-inflacionario que contempló la devaluación del austral un 114%, la caída y liberación de las tasas de interés, la fijación de un tipo de cambio único, un congelamiento de precios acordado con 350 grandes empresas -que ni siquiera cumpliría Bunge y Born-, un gran aumento de tarifas (de 200 a 650% en teléfonos, electricidad y gas) y de combustibles (un 600%), una suma fija no remunerativa y un adelanto en los sueldos públicos y pautas en los privados (Clarín, 10/7/89).

Este shock -"cirugía mayor sin anestesia", en términos del presidente- redujo la inflación a tasas (IPC, año base 1988) del 9,4% (Septiembre), 5,6% (Octubre) y 6,5% (Noviembre), aumentó en u\$s 1300 millones las reservas del BCRA y llevó las tasas de interés a un 10% mensual. El sector empresario aferrado a una economía proteccionista y semi-cerrada (y los trabajadores del sector público, principales afectados por la reducción del gasto público), sin embargo, expresarían sus resistencias al ajuste. Al ampliarse la brecha cambiaria, Rapanelli devaluó el austral, aumentó las tarifas de los servicios públicos y los aranceles de importación. Con una inflación prevista para Diciembre del 40%, la reacción ante dichas medidas produjo la caída de Rapanelli y el ascenso de Erman González al Ministerio de Economía (29).

Erman González, democristiano y ex-ministro de economía de La Rioja, liberó los controles de cambio y los precios y paró el rebrote hiperinflacionario. Este ajuste, en extremo liberal-ortodoxo, sería reajustado varias veces para evitar nuevas corridas: canje de plazos fijos por bonex del Erman II, aumentos de los impuestos a las exportaciones y del IVA (generalizado), recortes del gasto público a partir de los salarios, suspensión de los pagos a los contratistas y de los beneficios del proteccionismo de los Erman III, IV y V, apertura del

comercio exterior y blanqueo de capitales del Erman VI y sus correcciones del VII. Estas medidas reducen la inflación a un 6,2% para el último trimestre de 1990 y también el déficit fiscal, mediante una reducción del gasto del 61,7%, mientras que aumentaban a u\$s 8.200 el superavit. Pero su carácter recesivo quedaría de manifiesto en la caída de un 0,5% del PBI (3,2% del PBI per cápita), de los salarios del sector público un 40% y de los industriales entre un 15 y un 20%, y un aumento del desempleo y subempleo a un 15% de la PEA sumados (30).

Sin embargo, el dólar terminaría disparándose nuevamente en Enero de 1991, el austral perdería otro 50% de su valor y Cavallo -que había estatizado la deuda como funcionario de la dictadura, en 1982, y acompañaba desde el comienzo el ajuste menemista- asume como ministro. En Marzo de 1991 anunció el Plan de Convertibilidad, que establecía legalmente la vigencia del patrón-dólar (comprometiéndose por ley a no emitir, para cubrir el déficit fiscal, sin respaldo en oro o en divisas extranjeras) y ponía en juego las reservas de u\$s 6.000 millones acumuladas por Erman (31).

Los sucesivos shocks anti-inflacionarios de los planes BB y Erman I-VII enfrentaron, desde el comienzo, la resistencia de los sectores sociales más afectados por el ajuste. Los trabajadores públicos, golpeados por la caída del salario y los despidos, fueron el eje de la misma: las movilizaciones del 20/2/90 y del 21/3/90, con los empleados de Ferrocarriles y de SOMISA al frente, las huelgas de docentes y judiciales y la "Plaza del No" son algunos ejemplos. Esta resistencia de los trabajadores, sin embargo, tendería a retroceder desde la implementación del plan de convertibilidad de Cavallo, apoyado monolíticamente por el conjunto de la burguesía.

El plan Cavallo reduciría sensiblemente la inflación del 27% de Marzo, con índices mensuales decrecientes desde un 5,5% para Abril hasta un 0,6% para Diciembre, y las tasas de interés caerían al 3% mensual. Se garantizaba al mismo tiempo un recorte presupuestario del orden de los u\$s 6.000 millones mediante la reducción de los empleados públicos (cesanteados o "voluntariamente retirados", 70.000 menos en los primeros seis meses de Cavallo, y se proyectaba llevar a 130.000 esta cifra para mediados de 1992). Las elecciones de legisladores y gobernadores de Septiembre de 1991 se realizarían con la economía estabilizada a corto plazo (y con algunos indicios de recuperación): parecía exorcizado el temido fantasma de la hiperinflación y el PJ volvería a imponerse (32). Después de dos años

y medio de sobrevivir en una economía situada permanentemente al borde de un colapso hiperinflacionario, los trabajadores apoyaban con su voto a quienes parecían reestabilizarla.

En 1992 continuaba la reducción de la inflación (un 17,5% anual -IPC, base 1988-) con índices de 3% para Enero a 0,3% para Diciembre y se recuperaba el PBI un 8,7%. La estabilidad continuaría hasta el 0% de inflación de Agosto de 1993. El gobierno, eufórico con estos promocionados índices, lanza la campaña electoral para las legislativas del 3 de Octubre con la consigna "vote para adelante" (que atrás quedaría la hiperinflación). Los resultados marcaron un nuevo retroceso del radicalismo y un triunfo por amplio margen del menemismo tras 4 años de gestión, sin enfrentar alternativa alguna y conformando un mapa político sin precedentes que requiere un serio análisis (33).

Pero la especificidad del menemismo no radica en la implementación de severos shocks anti-inflacionarios. La misma consolidación de estos shocks exigía encarar veloz y radicalmente la transformación de algunas piezas claves del capitalismo argentino en crisis, piezas que los economistas burgueses consideran como las fuentes de los desequilibrios inflacionarios: las empresas del estado, las diversas formas de proteccionismo y las conquistas sociales. Pero, si bien encarar estas transformaciones resulta urgente en el marco del plan Cavallo -pues su continuidad depende directamente del superavit-, habían sido anticipadas desde el comienzo.

Dos leyes (las de Emergencia Económica y Reforma del Estado, elaboradas con la participación de R.Dromi, del MOSP) fueron anunciadas por Roig y sancionadas por el Congreso -con el apoyo de los radicales- apenas unas semanas después de su asunción como ministro (Clarín, 10-7-89). Las leyes apuntaban centralmente a reducir el déficit fiscal, evitando el pago de los sobrepagos fijados por los contratistas y proveedores del Estado (cerca de u\$s 2.000 millones), de las reparaciones emergentes de juicios contra el Estado -incluidas las deudas previsionales- y de subsidios enmarcados en los regímenes de promoción industrial (unos u\$s 4.000 millones). Las empresas públicas fueron intervenidas por 180 días y se encomendó a sus autoridades la tarea de reestructurarlas (rescindir contratos, despedir personal) y privatizarlas. Un acelerado proceso de privatizaciones se inició desde entonces. Ya en 1990 se había dispuesto la privatización de la telefónica ENTEL, Aerolíneas Argentinas y varias empresas dirigidas por el Ministerio de Defensa, y se habían concedido derechos de explotación de áreas petroleras antes reservadas a YPF. A estas empresas se agregarán luego las de líneas marítimas (ELMA), correos y telégrafos

(ENCoTel), carbón (YCF), agua (OSN), transportes subterráneos (SBA), electricidad (SEGBA, AyE e Hidronor), Gas del Estado y la metalúrgica SOMISA. Serán entregadas al sector privado, además, líneas ferroviarias y rutas nacionales. Se reestructurará y privatizará, finalmente, la mayor empresa pública, la petrolera YPF (34).

Estas privatizaciones apuntaban a la reducción del déficit fiscal y, supuestamente, al aumento de la tasa de inversión y de la eficiencia en las empresas privatizadas. Las funciones del Estado se reducían a las esenciales: salud, educación, justicia y seguridad -aunque más tarde también éstas serían consideradas como no esenciales. Naturalmente -y en especial con Cavallo- los ingresos obtenidos por estas privatizaciones tendieron a reducir a corto plazo el déficit fiscal. Pero los otros dos objetivos quedarían relegados a la mera propaganda conservadora. Aerolíneas Argentinas es un buen ejemplo: un año y medio después de su privatización (hecha violando las condiciones de los pliegos), el Estado debió recuperar el 33% de las acciones porque la empresa a cargo (Iberia) pagó sus deudas por u\$s 166,7 millones con acciones sobre un activo que, milagrosamente, había caído de los u\$s 885,6 millones iniciales a unos 290 y convivía con un nuevo pasivo de 890 millones. En realidad, estas privatizaciones eran un fraude de antemano. YPF se vendió a \$ 19 por acción y el precio de mercado era de \$ 21,5: la diferencia arroja una pérdida de unos u\$s 420 millones en la venta. Tres meses después, los compradores habían obtenido ya un 38% de ganancia (Clarín, 2/7 y 6/10/93). Otro objetivo de las privatizaciones, menos publicitado por los ideólogos conservadores, era capitalizar porciones de la deuda externa mediante los pagos en títulos. La reducción de deuda implicada sólo en las dos grandes privatizaciones de Erman (ENTel y Aerolíneas) alcanzó la suma récord de u\$s 6.500 millones. El gobierno había firmado con el FMI, el Banco Mundial y el Club de París, desde fines de 1989, acuerdos en los que había contraído compromisos que cumpliría en buena medida mediante esta política de reforma del Estado. Ahora bien, si consideramos la importantísima participación que los grandes capitales monopolistas locales tuvieron en las privatizaciones (Perez Companc ostenta el título de mayor comprador), éstas resultan muy paradójicas: esos grandes capitales, que se consolidaron financieramente aumentando la deuda externa con M. de Hoz y transfiriéndola al Estado con Cavallo, comprarían títulos de aquella deuda para adquirir las empresas del Estado -cuya privatización reclamaban desde los tiempos de Videla.

Una tercera ley (de Reforma Tributaria) fue aprobada a fines de 1990. La estructura tributaria emergente de ella sería aún más regresiva que la anterior, porque sustentaba el aumento de la presión tributaria (hasta un 21% del producto para la primera mitad de 1991) en el IVA -impuesto indirecto aumentado y generalizado- y en las cargas de Seguridad Social (además de intensificarse la fiscalización). En 1985/86 los impuestos directos (ganancias y patrimonio) representaban el 10% de la recaudación del Estado nacional, los indirectos el 50%, las cargas sociales sobre los salarios el 25%, y los impuestos al comercio exterior el 15%. En 1991/92, en cambio, los impuestos directos mantenían su 10%, pero los indirectos habían aumentado al 55% y las cargas sociales al 30%, cayendo los impuestos al comercio exterior a un 5% del total.

Finalmente, un amplio conjunto de medidas apuntaba a la "desregulación" y "apertura" de importantes sectores de la economía. Una Ley de Inversiones Extranjeras facilitaría la radicación de capitales foráneos y la remisión de utilidades. Un Decreto de Desregulación Económica y otras medidas anexas dejaría librados a la oferta y la demanda el comercio interno y externo, el mercado de capitales, la seguridad social y los contratos laborales. Para completar el panorama, una Ley de Flexibilización Laboral y otra Ley de Reforma Previsional revertirían históricas conquistas del movimiento obrero: la jornada de 8 horas y 38 semanales, los descansos de Domingo y Sábado inglés, las indemnizaciones, el 82% y las edades para jubilarse, en vistas de la denominada "reducción del costo argentino" (35).

La ley de "Flexibilización Laboral" está en discusión previa a su ingreso al Congreso. La negociación tripartita (Caro Figuroa -Ministro de Trabajo y "flexibilizador" en España-, representantes de los empresarios y de la burocracia sindical) apunta a la reducción del costo laboral con vistas a la competitividad: un motivo que remite a la doctrina de los "neoclásicos", pues los empresarios argumentan que los trabajadores argentinos están explotando con su salario a otros sectores de la sociedad, al cobrar por encima de la productividad, y este hecho no les permite competir en el mercado mundial ni aún en un mercado interno parcialmente desregulado. Por esta razón, el representante de la UIA declaró sin mediaciones a *La Nación*: "o flexibilizamos legalmente, o bajamos salarios y condiciones de trabajo".

La burocracia sindical acusó recibo del mandato patronal y negocia a cambio las obras sociales y otras prebendas con el argumento de que se ha modernizado y está a favor

de una reestructuración que permitirá el ingreso de Argentina al cada vez más competitivo mercado mundial creando empleos y mejorando el nivel de vida de los trabajadores.

A pesar de la entrega de la burocracia, recientemente los trabajadores de SEVEL pararon y ocuparon una de sus plantas, pasando por encima y exigiendo la renuncia de su comisión interna, para reclamar aumentos salariales proporcionales a los incrementos de la productividad alcanzados. Pocos días más tarde, unos diez mil trabajadores de SMATA realizaron una marcha por aumentos salariales y contra la flexibilización laboral -protagonizando la mayor movilización obrera desde la asunción del menemismo y abriendo nuevas perspectivas de lucha en el seno mismo de uno de los sectores más dinámicos de la industria argentina.

La ley de “Previsión Social”, ya aprobada por el Congreso y actualmente en aplicación, constituye una expropiación sin precedentes contra los trabajadores. Las “Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones” (AFJP) son -como dice la ley 24241 - “empresas cuyo objetivo principal es administrar un fondo constituido por los aportes de los afiliados que optaron por el régimen de capitalización (privado).” Este “servicio de administración” asegura a las AFJP una comisión de por lo menos un 2,5% del sueldo de los trabajadores, con lo que para estos “servidores” se abrió un negocio de unos 350 millones de dólares de comisiones para el primer año de implementación del sistema. El restante 8,5% del 11% total del aporte es la llamada “capitalización individual” que se asegura a la AFJP para poder invertir en acciones, títulos, etc., con lo que el futuro de esos fondos estará sujeto a los vaivenes del mercado financiero.

Menem decretó la eliminación de la garantía en dólares -que establecía el artículo 40 de la ley- de la AFJP del Banco Nación (que también entró en el negocio) y por otro lado hace campaña para que los trabajadores se afilien al sistema privado, demostrando su apoyo incondicional a esta estafa. Las razones son sencillas. Las AFJP, integradas por los bancos privados y públicos y las compañías de seguros, calculan que con sólo el 35% de las potenciales afiliaciones el negocio es incomparable: el 2,5% mínimo de comisión es un beneficio varias veces millonario que va directamente a la caja privada de las AFJP. El 8,5% restante iría al mercado financiero, produciendo -como aseguran que ocurrió en Chile- un inmenso movimiento de capitales capaz, por sí mismo, de dinamizar dicho mercado. Como era previsible, la burocracia sindical no podía quedar afuera de este negocio y no sólo

participa en la privatización de empresas sino que integra algunas AFJP y convoca con solicitudes a los trabajadores de su sector a afiliarse a la jubilación privada.

Pero no todo es fiesta en el negocio. Al bajo número de afiliaciones registradas hasta el presente -pese a los mil millones de dólares invertidos en publicidad- se agrega una “crisis interna” por la renuncia de tres funcionarios de la llamada “Superintendencia de AFJP”, que consideran que dicho ente de regulación y control no regula ni controla el accionar de las AFJP.

Mediante esta serie de iniciativas *el menemismo retoma, desde el comienzo y con una intensidad sin precedentes, el proceso de reestructuración del capitalismo argentino*. Pero ¿cuáles son las razones que explican esta política? La crisis había venido profundizándose desde la caída de la dictadura, y el gobierno menemista enfrenta en 1989 una situación más crítica que la enfrentada por el alfonsinismo en 1984. Las decisiones debían ser radicales. La lentitud del gobierno alfonsinista para encarar las transformaciones propias del proceso de reestructuración capitalista había determinado su fracaso y esta experiencia gravitó sobre las decisiones iniciales del nuevo gobierno.

El peronismo de 1989 -por más paradójico que resulte- parece adecuarse como estructura política a las imperativos de la reestructuración. La combinación entre su verticalismo tradicional -que permite subordinar a los distintos sectores de la "rama política" y, en particular, a buena parte de la burocracia sindical- y su descomposición interna desde los tiempos de la muerte de Perón y el golpe del 76, explican la gestación interna del neoconservadurismo menemista y su control casi monolítico del partido (36).

Sin embargo, estas y otras respuestas semejantes apenas pueden aspirar a una explicación parcial del menemismo. La pregunta que queda pendiente es la central: ¿por qué la reestructuración menemista, que constituye sin duda la ofensiva contra los trabajadores más salvaje de nuestra historia, sigue avanzando sin enfrentar un incremento de la resistencia de esos mismos trabajadores? Esta pregunta nos remite directamente a los factores políticos e ideológicos que intrevienen articulando la reestructuración capitalista con la evolución del régimen democrático de dominación.

La política del menemismo se caracteriza por sus rasgos autoritarios cada vez más marcados, rasgos que profundizan la crisis del régimen democrático manifiesta en los últimos años del alfonsinismo. La primera decisión que señalaría el rumbo autoritario del nuevo gobierno es el indulto para los militares responsables de la represión, las Malvinas y

las sublevaciones de Semana Santa, Monte Caseros y V. Martelli. Este indulto -consensuado antes de su asunción con la UCR, la UCeDé, los militares y la Iglesia- profundizaría el Punto Final y la Obediencia Debida dictadas por Alfonsín, liberando a los 277 militares (junto con algunos presos políticos) que aún quedaban y alcanzando la "pacificación" completa del país (La Nación, 8/10/89).

Además, el menemismo desarrolla una modalidad caudillista y autoritaria de hegemonía que se manifiesta paulatinamente en diversas situaciones (37). Las relaciones que el Ejecutivo establece con los poderes restantes (Legislativo y Judicial) y con los gobiernos provinciales son buenos ejemplos. Menem tomó importantes decisiones mediante un número desmesurado de "decretos de necesidad y urgencia" (244, contra 25 dictados entre 1853 y 1989, según cifras del CEPPA -Clarín, 13-9-93), en su mayoría relativos al proceso de reestructuración (sobre impuestos, salarios, deuda pública) y nunca ratificados por el Congreso. Esta desvalorización del Poder Legislativo -del que el PJ, sin embargo, controla la primera minoría- culmina con las propuestas de asesores de Menem apuntando a la clausura del Congreso. Sus relaciones con el Poder Judicial no son muy diferentes. El gobierno aumenta los miembros de la Suprema Corte como una de sus primeras decisiones y nombra 4 nuevos jueces oficialistas, suficientes para mantenerla bajo su control. Escándalos posteriores (los casos de Servini de Cubría por el "narcogate" y de Belluscio y Petracchi por los pagos del BCRA son apenas los más resonantes) desnudarán otras presiones sobre el poder judicial. Las intervenciones a los gobiernos provinciales (Corrientes, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero) y las extorsiones (vía coparticipación, Pacto Fiscal, etc.) que apuntan a llevar la reestructuración a las provincias completan este panorama. Acaso deben incluirse aquí, además, las presiones sobre el periodismo (casos de López Echagüe y otros).

La corrupción generalizada entre los miembros del equipo menemista también debe inscribirse en el contexto de esta modalidad autoritaria de construcción de una hegemonía. En efecto, la corrupción no constituye propiamente un problema moral o jurídico, sino un instrumento de cohesión interna del gobierno alrededor de su política de reestructuración capitalista (37). Un buen ejemplo es el "*affaire* Enron": la intervención del embajador yankee en favor de la empresa Enron y contra Pérez Companc. T. Todman presiona a Erman González para acelerar la realización de una separadora de gases en Neuquén, atribuida a la Enron mediante un decreto de Granillo Ocampo de comienzos de 1990 y suspendida un año más tarde por las presiones de Pérez Companc. El vínculo entre estos mecanismos corruptos

y la política reestructuradora del menemismo es evidente. Cinco ministros ya fueron acusados de corrupción y figuran entre ellos los principales responsables de las privatizaciones: Dromi del MOSP (peajes, pliegos de Aerolíneas Argentinas, Compañía Naviera Paraná) y Triaca de Trabajo (SOMISA), además de la interventora Alsogaray (ENTel), el intendente Grosso (Golf, escuela-shopping, velódromo), y otros menores.

El autoritarismo, finalmente, queda de manifiesto en las respuestas del gobierno a varios casos de resistencia a su política neoconservadora. La lucha de los trabajadores del sector público durante los planes BB y Erman tuvieron que enfrentar la restricción legal del derecho de huelga y la presión sobre la burocracia sindical. Las movilizaciones de los jubilados, más tarde, serían reprimidas. Hay claros indicios de que, en caso de incrementarse la resistencia de los trabajadores, el gobierno menemista respondería de una manera abiertamente violenta.

Los rasgos autoritarios del menemismo responden a causas precisas. Por un lado, las transformaciones inherentes a la reestructuración son tan profundas y acarrear consecuencias sociales tan graves que requieren una sólida hegemonía política. Esta hegemonía difícilmente pueda construirse de una manera democrático-burguesa más o menos "pura" en una sociedad como la nuestra -y los fracasos de la burguesía argentina en la materia, que condujeron en otras circunstancias al empleo directo de las Fuerzas Armadas, testimonian esta dificultad. En este sentido, más debería sorprender la capacidad del menemismo para implementar su política conservando la vigencia de algunos mecanismos democrático-burgueses que sus rasgos autoritarios. Por otro lado, desde la caída del alfonsinismo, los grandes capitales monopolistas se hicieron cargo cada vez más directamente de implementar la reestructuración. Esto elimina mediaciones políticas, acota notoriamente los márgenes del consenso democrático-burgués y convierte a la política en un mero instrumento ejecutivo. Instaura una suerte de dictadura del capital. Esta des-politización de la política es encuadrada por *una ideología es encuadrada por una ideología pragmatista característica del neoconservadurismo que presenta los intereses del gran capital como necesidades objetivas.*

5. 1994: profundización de la crisis.

La política autoritaria y la ideología pragmatista del menemismo -determinadas ambas por el proceso de reestructuración capitalista- acarrear para el régimen democrático de dominación son evidentes. La crisis de este régimen, iniciada en tiempos del alfonsinismo, se profundiza paulatinamente desde entonces hasta fines de 1993. Sin embargo, desde fines de 1993, dos acontecimientos muestran una profundización sin precedentes en esta crisis: el contubernio radical-peronista perpetrado en noviembre por arriba y la insurrección que los santiagueños protagonizaron en diciembre por abajo.

La crisis del régimen democrático arrastra consigo, necesariamente, a los partidos políticos burgueses que no están a cargo del poder ejecutivo. El primer caso fue el de la UCeDé. La UCeDé, que había crecido aceleradamente hasta ubicarse en 1987 como tercera fuerza a nivel nacional, hace una alianza con el gobierno menemista y empieza a retroceder en las votaciones posteriores. Las elecciones de junio de 1992 para senador capitalino ponen en desnudo su crisis: Porto (PJ-UCeDé) es derrotado por De La Rúa. En la UCeDé convivían dos proyectos, y se jugaron en esas elecciones: Alsogaray defendía una UCeDé que fuera “grupo de presión” y declararía satisfecho que la misma “se fagocitó al peronismo” porque “el gobierno privatiza y desregula los mercados, tal como lo venimos diciendo nosotros desde hace mucho tiempo”. Clérici en cambio proyectaba una UCeDé que fuera verdadero “partido de derecha” y subrayaba que “el apoyo a algunas políticas del gobierno no podía significar obsecuencia o desaparición política” (*Página 12*, 30-6-92). La “estrategia de fagocitación” de Alsogaray -que aplicara en las dictaduras- prevaleció y la UCeDé comenzó a desaparecer como expresión política hasta alcanzar apenas un 3% de los votos durante la última elección. El segundo caso -mucho más relevante, porque afecta a uno de los dos pilares del bipartidismo argentino- es el de la UCR. La UCR, incluidos todos sus sectores internos, carece completamente de una alternativa a la política reestructuradora del menemismo.

Algunos sectores siguen enfrentando al menemismo sin nada que decir: Terragno -el “modernizador” alfonsinista de la “Argentina del siglo XXI”- fracasa entonces en sus polémicas con Cavallo. Otros sectores preferían asumir como propia la política económica menemista y agregarle algunos aditamentos (necesidad de una “mayor prolijidad”, de “ética”, etc.): De La Rúa -que había vencido a Terragno en la UCR capitalina- declaraba a mediados de 1992 que “con un proyecto radical, o sea, libre de los conflictos de este gobierno y sin este marco de corrupción, Cavallo podría ser extraordinario” (*Noticias*,

29-3-92). La contundente derrota sufrida por De La Rúa en las elecciones de 1993 marcaría los límites de un oportunismo semejante (39). Angeloz -que aparece actualmente como el principal precandidato de la UCR para 1995- y sus asesores, Sturzenegger y López Murphy, no pierden una sola oportunidad para alabar las virtudes del plan Cavallo (y éste, recíprocamente, no duda de las virtudes técnicas del equipo económico de Angeloz). Esta ausencia de alternativa a la política menemista deriva de que, en el actual contexto de crisis y dentro del marco capitalista, cualquier alternativa se reduce necesariamente a ser una variante apenas matizada del programa económico desarrollado por Cavallo.

En este contexto debe analizarse el contubernio Menem-Alfonsín. La profunda crisis que atraviesan los principales partidos burgueses de oposición fortalece inmediatamente al menemismo, pero a la vez genera incertidumbre a mediano plazo respecto de las posibilidades de recambio político si fracasa el menemismo. El sistema de partidos (el mecanismo de relevos del bipartidismo) parece, entonces, resultar insuficiente a efectos de garantizar un marco de estabilidad política a la reestructuración capitalista -detrás de la que está alineada monolíticamente la gran burguesía. El propio contubernio de Olivos y la reforma de la constitución acordada (el ministro coordinador, el ballottage, los tres senadores por provincia, el sistema de nombramiento de la corte suprema son aquí tan importantes como la propia reelección presidencial) apuntan, justamente, a generar nuevos recursos de estabilidad política para enmarcar la reestructuración. El apoyo fuerte y unánime brindado al contubernio por la Unión Industrial, la Sociedad Rural, la Cámara de Comercio, la Asociación de Bancos de la República Argentina y otros representantes del capital basta para demostrarlo contundentemente (ver *Clarín*, 16/11/96).

Sin embargo, los resultados del plebiscito/abatamiento que organizó el gobierno menemista y el alfonsinismo para legitimar en las urnas su contubernio cuestionaron -al menos parcialmente- sus virtudes estabilizantes. Estos resultados convirtieron al contubernio, más bien, en un exponente por arriba de la crisis del régimen de dominación. Tras una campaña propagandística inédita, en la cual los candidatos radicales criticaban a sus compañeros de contubernio mientras los peronistas convocaban a votar a su partido o a los radicales, ambos partidos retrocedieron: apenas alcanzaron sumados el 60% de los votos emitidos -la cifra más baja desde 1983. Además, el contubernio resultó escasamente redituable para cada uno individualmente considerado. La UCR fue la gran perdedora: retrocedió desde su ya reducido 30% de 1993 a apenas un 20% -su peor elección desde

1983 a la fecha, al punto de perder más de un millón de votos. La magnitud de esta derrota produjo una serie de enfrentamientos entre sectores internos aún no superados. El PJ, aunque logró una nueva victoria, retrocedió del 42% de 1993 a cerca de un 39% -perdiendo otro millón de votos- y no alcanzó a obtener la mayoría de constituyentes que esperaba. La dispersión del voto favoreció principalmente a fuerzas que aparecieron como opositoras de centro-izquierda (el Frente Grande, con casi 14% y su victoria en Capital Federal, y la Unidad Socialista con un 3%) y como opositoras de derecha (el MODIN, con un 9%, y algunos partidos provinciales). Es cierto que ninguna de estas fuerzas representa una amenaza para la estabilidad del régimen: las declaraciones de Chacho Alvarez apoyando las privatizaciones y el plan económico -y recibidas con agrado en la city- eliminan dudas al respecto (ver *Clarín* y *Ambito Financiero* del 11/4/94). Pero es igualmente cierto que el plebiscito había sido organizado, simplemente, para legitimar en las urnas la reforma pactada en Olivos con una abrumadora mayoría radical-peronista.

Sin embargo, un aspecto importante de estos resultados, un aspecto que evidencia como ningún otro el aceleramiento en la crisis del régimen, no puede analizarse a partir de estos desplazamientos electorales. Dejemos su formulación a uno de los miembros prominentes del *establishment*, R.Alemann: "Entre la abstención, el voto en blanco y los nulos, hay un 35 o 36% que rechazó el tema de la reforma, mientras que los partidos del pacto sumaron apenas el 40%, lo cual demuestra que a la gente no le gustó el tema" (*Clarín*, 12/4/94). Alemann hace bien en preocuparse por este aspecto de los resultados, ya que sumando los votos del PJ y la UCR apenas llegan al 42% del total del padrón electoral.

La participación política mermó continuamente durante la caída del alfonsinismo y el gobierno menemista: el voto en blanco aumentó desde 1,41% en 1985 hasta 4,66 en 1991, cayó levemente en 1993 -aunque superando un 3,5% del padrón- y pasó nuevamente el 4,5% en 1994. Los votantes para presidente de 1983 eran el 81,27% del padrón y el 82,29% en 1989, cifra que declina abruptamente hasta un 75,35% en las constituyentes de 1994 (40). Los votantes en las internas de 1993 apenas suman 1/3 de los empadronados en los partidos ("¿Dónde están los militantes?", artículo de R.Fraga en *Clarín*, 19/7/93). Las actividades de militancia política de los partidos burgueses se reducen a millonarias campañas publicitarias previas a las elecciones.

Aún los programas políticos de TV, innumerables a mediados de los 80, pierden rating y se convierten en "programas de actualidad general" (Hadad, Longobardi, Grondona)

o en simples shows (Neustadt, Gambini/Beldi). El descrédito sufrido por los políticos tradicionales aumenta en las encuestas y los partidos burgueses tienden a legitimarse mediante mecanismos bastardos de representación, es decir, capitalizando una representatividad que proviene de actividades ajenas a la política. Las candidaturas extra-políticas del cantante Ortega para gobernador de Tucumán, del automovilista Reutemann para gobernador de Santa Fé, de la escritora Mercader para diputada, son casos que preceden a las recientes negociaciones con varios miembros de la farándula (41).

Sin embargo, la insurrección de los santiagueños de fines de 1993 puso en evidencia como ningún otro acontecimiento el aceleramiento alcanzado por la crisis del régimen democrático de dominación -y permite explicar, al menos en parte, las tendencias abstencionistas y votoblanquistas que preocupan a Alemann: aquellas cifras se elevaron a casi 40% y 8%, respectivamente, de abstenciones y votos en blanco. El santiagazo no es un acontecimiento aislado: movilizaciones en La Rioja, Chaco y Jujuy lo precedieron y otras movilizaciones en Jujuy y Salta siguieron sus pasos. Pero el santiagazo fue, indudablemente, más profundo. Santiago del Estero está, junto a las otras nombradas, entre las provincias más empobrecidas del país. El avance de la reestructuración capitalista, vía Pacto Fiscal, sobre la provincia -y una de sus expresiones específicas, la “ley omnibus”- acarrea retrasos de varios meses en los pagos de sueldos, reducciones de los salarios, despidos de empleados públicos que nunca encontrarían empleo en el ámbito privado debido al empobrecimiento de la economía santiagueña. Esta avanzada reestructuradora estaba comandada, además, por una camarilla de dirigentes políticos corruptos y completamente irrepresentativos. Una marcha para reclamar la derogación de la “ley omnibus”, organizada por ATE, es convertida por los manifestantes entonces en una verdadera insurrección popular. Las fuerzas de seguridad son desbordadas, las sedes del poder (la casa de gobierno, la legislatura, el palacio de justicia) y más tarde las lujosas residencias de la camarilla dirigente son asaltadas e incendiadas (42).

Las limitaciones objetivas y subjetivas del santiagazo son evidentes: se desarrolló en una provincia sin peso económico ni político, desindustrializada y despoblada por el éxodo de sus habitantes durante décadas y se encaminó hacia el asalto inmediato de las instituciones sin crear una nueva dirección ni cristalizar alternativas duraderas de gobierno. Empero, el santiagazo -y las movilizaciones anteriores y posteriores en las provincias

norteñas- puso de manifiesto la crisis del régimen de dominación y señaló, simbólicamente si se quiere, un camino de resistencia.

6. Conclusiones: crisis y nuevas perspectivas

Recordemos algunas ideas arriba esbozadas. Las condiciones del restablecimiento del régimen democrático se caracterizan por las transformaciones de la sociedad argentina que realiza la dictadura -particularmente, la consolidación de una gran burguesía monopolista mediante una profunda ofensiva contra los trabajadores- y las luchas democráticas que acompañan el retiro de la dictadura en un marco de recesión y reconversión del capitalismo mundial. Estas dos condiciones determinan los rasgos del período alfonsinista. El alfonsinismo encauza el restablecimiento del régimen democrático dentro de límites burgueses, mediante una política e ideología abstractamente democratizantes desarma la democracia, pero al precio del estancamiento de la reestructuración capitalista y la profundización de la crisis. Esta tensión se supera hacia 1989: la gran burguesía toma las riendas de la situación (hiperinflación) y las mediaciones democrático-burguesas se disuelven (estado de sitio). Estas condiciones determinan, a su vez, los rasgos del período menemista. El alfonsinismo había madurado un huevo, ahora nacería la serpiente: el menemismo instaura una dictadura del capital y acelera, a través de una política y una ideología pragmáticamente autoritarias, la reestructuración hasta el presente.

Pero la reestructuración capitalista es primaria y fundamentalmente una salvaje ofensiva burguesa contra los trabajadores ¿Qué rol desempeñaron estos últimos frente a aquella ofensiva?, ¿qué políticas deberían desarrollar?, ¿qué perspectivas de revertir esta relación de fuerzas los acompañan?

Las luchas de los trabajadores durante estos últimos diez años fueron esencialmente defensivas y limitadas. Resistieron la ofensiva burguesa en sus aspectos coyunturales (las alzas inflacionarias que reducían sus salarios y los shocks anti-inflacionarios que descargaban sobre sus espaldas los costos de la estabilización), sin éxito a mediano plazo y casi sin

enfrentarla en sus aspectos más profundos (las medidas de reestructuración propiamente dichas: legislación laboral y previsional, privatizaciones). Y aún estas luchas defensivas y limitadas menguaron sensiblemente -inflación controlada mediante- desde la implementación del plan de convertibilidad.

La derrota sufrida por los trabajadores en la dictadura resulta sin duda el factor explicativo más importante a largo plazo (43). Sin embargo, desde los tiempos de la represión hasta el presente pasaron unos quince años y nuevas generaciones de trabajadores se sumaron al mercado de trabajo y desarrollaron nuevas experiencias de lucha. Habida cuenta del incremento que alcanzaron sus luchas durante los años del alfonsinismo y el retroceso posterior, es necesario detenerse sobre algunos factores de más corto plazo.

En primer término, la burocracia sindical constituyó un importante obstáculo. En el período alfonsinista, esta burocracia subordinó el interés de clase de los trabajadores al del PJ, organizando burocráticamente (sin asambleas de base, discusión, etc.) paros generales con reivindicaciones limitadas (los "26 puntos") y desarticulados respecto de planes de lucha de largo alcance. Desde el comienzo del período menemista, la CGT se dividiría en una oficialista (la CGT-San Martín de Triaca) y otra arrastrada hacia la oposición (la CGT-Azopardo de Ubaldini) por el peso que los sindicatos de trabajadores públicos -más golpeados- tenían dentro de la misma. Pero la CGT ubaldinista no realizaría tampoco una oposición consecuente, se mantendría "a media agua" y perdería peso junto con sus dirigentes. Actualmente, el Secretario General de la CGT, Brunelli, es un diputado del bloque menemista.

En segundo término, las agrupaciones de izquierda serían incapaces de constituirse en una dirección alternativa a la burocracia. El Partido Intransigente -tendencia de izquierda burguesa, nacionalista y populista- alcanzaría un crecimiento importante en la transición y primeros años del alfonsinismo (hasta llegar al 7% de los votos en 1985 constituyéndose en tercera fuerza) pero apoyaría las políticas oficiales (del plan Austral al de convertibilidad) perdiendo peso político hasta terminar siendo Alende, su líder, diputado electo del menemismo. La izquierda clasista -en particular el MAS y las alianzas del mismo con el PC y otros grupos menores- experimentó más tarde un crecimiento social y electoral bastante prometedor pero, a raíz de su incapacidad para caracterizar adecuadamente la situación y trazar una estrategia revolucionaria coherente, comenzó a retroceder y un rápido proceso de escisiones internas terminó borrándola de la realidad (44). Esta izquierda política

que -a pesar de sus limitaciones- alguna vez alcanzó a ofrecer una alternativa organizativa a sectores de vanguardia, en la actualidad quedó completamente al margen de la lucha de los trabajadores.

En 1975, los salarios representaban un 53,8% del PBI. En 1983 esta cifra había caído a un 41%, en 1990 a un 30% y en la actualidad apenas alcanzaría un 20%. El salario real de 1991 era 1/3 del salario de 1974. Los ingresos del 10% de los argentinos más ricos se incrementa de un 35% del PBI en 1974 a un 44% en 1980 y un 46% en 1990. Sobre una población total de 32,5 millones de habitantes hay 10 millones por debajo de la línea de la pobreza. La mitad de estos 10 millones de pobres son niños y 1 millón de niños sufre desnutrición (45). Estos son los saldos de la reestructuración del capitalismo argentino y las ilusiones depositadas en una reestructuración menos salvaje, más civilizada, resultan ser objetivamente reaccionarias (46). *La izquierda socialista enfrenta una tarea urgente: impulsar y organizar la resistencia a todas y cada una de las medidas implementadas por el régimen para aumentar la explotación de los trabajadores y demás oprimidos.* Empero, las transformaciones operadas por la reestructuración hasta el presente son irreversibles dentro de los límites del capitalismo argentino y de la recesión capitalista mundial. Y en este punto, la resistencia contra la reestructuración no puede orientarse a la reconstrucción del denominado "Estado Social", sino hacia la construcción del socialismo. *La izquierda socialista debe analizar la reestructuración en curso para alcanzar una caracterización precisa de la etapa y encarar su tarea estratégica: superar las reivindicaciones defensivas y plantear una alternativa socialista a la crisis.*

Las políticas neoconservadoras de reestructuración del capitalismo comienzan a enfrentar actualmente importantes resistencias sociales y políticas en Latinoamérica y la continuidad de dichas políticas peligra en los principales países de la región: el levantamiento campesino de Chiapas y el asesinato del candidato presidencial priísta desencadenó una profunda crisis política en México, la bancarrota del gobierno Collor-Franco y la posibilidad cada vez más firme de un gobierno petista en Brasil preocupan a la administración norteamericana por la estabilidad política de la región. Dentro de este contexto, empiezan a manifestarse en la Argentina nuevas tendencias de enfrentamiento a la reestructuración capitalista que plantean una nueva situación respecto de las relaciones de fuerza. Podrían aislarse tres órdenes diferentes de enfrentamientos: 1) movilizaciones en el interior (La Rioja, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Catamarca), enfrentando la marginalización de

regiones y sectores enteros resultante del ajuste en las provincias. Son movilizaciones de trabajadores públicos apoyadas por amplios grupos de la comunidad, que profundizan la lucha que los mismos vienen desarrollando -en ocasiones, aislados del resto de los trabajadores- desde el comienzo de la reestructuración capitalista; 2) nuevas expresiones de disconformidad de las denominadas “clases medias” urbanas, cada vez más empobrecidas en su mayoría por la política económica del gobierno. Son expresiones inorgánicas de una disconformidad que no cuestiona sino aspectos secundarios de la reestructuración capitalista (los resultados de las recientes elecciones de convencionales constituyentes conforman un mapa de las mismas, ya volcadas a izquierda o derecha), pero introducen fisuras en el apoyo acrítico que dichos sectores brindaran a las sucesivas administraciones; 3) nuevas huelgas y movilizaciones de los trabajadores de sectores privados claves en la producción (metalúrgicos de Bs. As. y recientemente los trabajadores de Tierra del Fuego), que vuelven a la escena por reivindicaciones -hasta ahora- económicas.

La consolidación y el desarrollo de estos órdenes de enfrentamiento a la reestructuración capitalista plantea nuevos y serios desafíos. Desafíos de organización, pues una burocracia sindical convertida en empresariado, unos partidos de izquierda desintegrados y un agrupamiento de centro-izquierda electoralista y encerrado en las cuatro paredes de la superestructura política, son incapaces de ofrecer opción organizativa alguna. Además, desafíos de coordinación, pues los sectores sociales, los ritmos y las modalidades y aún los contenidos de las luchas desarrolladas son diferentes en los mencionados órdenes. Finalmente, estas nuevas tendencias de enfrentamiento imponen un desafío con respecto a su orientación política en una perspectiva anticapitalista. Estos desafíos, que comienzan a plantearse en la presente coyuntura, adquirirán urgencia conforme dichas tendencias locales de enfrentamiento a la reestructuración capitalista (y sus pares latinoamericanas) se profundicen, y con ellas se profundice también la crisis del régimen democrático de dominación política. Sería una ingenuidad suponer resueltos de antemano estos desafíos en dirección a una alternativa socialista.

La crisis del régimen democrático de dominación no tiene, *per se*, un carácter regresivo -como sostienen los radicales y la izquierda democratizante- ni tampoco progresivo -como la izquierda pretende-. Este carácter depende, justamente, de la capacidad de la izquierda clasista de generar aquella alternativa socialista. Este desafío fue lanzado con la imagen de un hombre cualquiera, sentado en el sillón de un gobernador de provincia,

blandiendo una suerte de bastón de mando, y siendo aplaudido por una multitud de insurrectos.

Buenos Aires, Abril de 1994.

Notas.

1. Ver RIVERA RIOS, M.: El nuevo capitalismo mexicano. El proceso de reestructuración en los años ochenta, México, ERA, 1992, III.

2. Ver CARNEIRO, D.D.: Los primeros tres meses del plan Collor, en ROZENWURCEL, G.: Elecciones y política económica en América Latina, Bs.As., Tesis, 1991, p.149 y ss.

3. El caso peruano es paradigmático de la violencia del ajuste y las consecuencias que acarrea para el régimen de dominación vigente. Fujimori, candidato populista de una nueva agrupación (Cambio 90), triunfa en las elecciones y lanza en Agosto de 1990 un ajuste con fulminantes medidas fiscales y monetarias (aumento de impuestos -en especial, para combustibles-, liberación de precios y congelamiento de salarios). Los alimentos aumentan un 446%, los medicamentos un 1385%, el vestido y el calzado un 297%, los servicios de salud un 702%. El aumento de salarios autorizado (100%) no compensa, obviamente, los aumentos de precios. Fuentes del propio gobierno aceptaron las cifras que cuantifican el resultado del ajuste: la personas en situación de extrema pobreza aumentaron de 7 a 12 millones. Desde el comienzo, Fujimori sustenta su ofensiva en el apoyo externo del FMI y el Japón e interno de las Fuerzas Armadas, en un proceso que culminará en el mencionado autogolpe (Ver: IGUÍÑIZ ECHEVERRÍA, J.: Ajuste e inflación en el plan Fujimori, en ROZENWURCEL, G: op.cit, p.387 y ss.

4. Para un análisis de la recesión económica mundial, ver DURAND, M.: ¿Adónde va la crisis?, en Cuadernos del Sur Nro. 14, Bs.As., 1992, p.11 y ss.

5. Distinción entre ambas formas de política económica elaborada a partir de FOXLEY, A.: Experimentos neoliberales en América Latina, México, FCE, 1988, I y II.

6. Acerca de la relación entre capitales monopólicos e inflación en Argentina, ver ASTARITA,R.: Inflación, en Izquierda Nro.2, 1986, p.28 y ss.

7. Ver SCHVARZER,J.: La política económica de Martínez de Hoz, Bs.As., Hyspamérica, 1986, I (Schvarzer evidencia esta aparente paradoja de la política económica de Martínez de Hoz, aunque explicándola de manera diferente y, a nuestro entender, insuficiente).

8. Datos tomados de Situación sindical en la República Argentina 76-79, informe publicado por la Secretaría de Relaciones Sindicales de la Federación Gráfica Bonaerense.

9. Ver ASPIAZU,D./KHAVISSE,M./BASUALDO,E.M.: El nuevo poder económico, Bs.As., Legasa, 1986, 4 y 5.

10. La gravedad de la crisis carecía de precedentes desde la depresión de 1930. La deuda externa había aumentado desde u\$s 7.875 millones en 1975 hasta 35.671 millones en 1981 (el 70% de estos capitales se habían fugado al extranjero desde 1979). En 1981 tiene lugar una profunda crisis en la balanza de pagos y en 1982 Cavallo cargó sobre el BCRA el 90% de la deuda y Wehbe -en el marco de los peligros de crac derivados de la crisis de la deuda en México- firma un acuerdo Stand by con el FMI. Mientras tanto, la inflación se había acelerado de un 100% anual en 1980 a un 130% en 1981, para dispararse tras la guerra de Malvinas y ubicarse en un 350% en 1983, y hacia 1981 había comenzado a caer la producción (un 5,7 del PIB) y seguiría cayendo hasta 1983.

11. Los datos corresponden al informe mencionado en la nota 7 y a POZZI,P.:Oposición obrera a la dictadura (1976-1982), Bs.As., Contrapunto, 1988, III.

12. Seguimos, en lo que respecta a la guerra de Malvinas, el agudo análisis realizado por Dabat y Lorenzano (DABAT,A./LORENZANO,L.: Conflicto malvinense y crisis nacional, México, Teoría y Política, 1982, II y III).

13. Ver DABAT,A.: El derrumbe de la dictadura, en AAVV: La década trágica. Ocho ensayos sobre la crisis argentina 1973- 1983, Bs.As., Tierra del Fuego, 1984, p.127 y ss.

14. Ver FERNANDEZ,A.: Las prácticas sociopolíticas del sindicalismo, Bs.As., CEAL, tomo II, 1988.

15. Ver al respecto las publicaciones del MAS, desde 1982: comienza la revolución de N.Moreno hasta el Documento del III Congreso de 1988.

16. Los resultados de las elecciones de 1983 fueron los siguientes para la presidencia: UCR 51,82%; PJ 40,16%; PI 2,33%; Partidos provinciales 2,5%; MID 1,21%; UCeDé 0,38% A.Federal 0,38%; PDC 0,31%; A.Demócrata-Socialista 0,28%; MAS 0,28%; PSP 0,14%; FIP 0,09% y PO 0,09% (de *La Nación*, 14/5/89). La UCR obtuvo así colegio electoral propio, con 317 electores contra 259 del PJ y un total de 600. El voto de la UCR provino de diferentes clases sociales. Un estudio habla de un 71% de los votos en los "sectores altos y medios altos" contra un 20% para el PJ; de un 67% en los "sectores medios-medios" contra un 25% para el PJ; y -aquí radicaría la novedad- de un 53% en los "sectores bajos estructurados" contra un 38% para el PJ. El PJ sólo superaría a la UCR en los "sectores bajos no estructurados/marginales" con un 56% contra un 41% (DE RIZ,L./ADROGUE,G.: Democracia y elecciones en la Argentina: 1983-1989, Bs.As., CEDES/52, 1990). En 1973, había sido el peronismo quien había arrastrado detrás suyo el amplio arco social que diez años después arrastraría la UCR, vencéndola rotundamente con un 49,53% de los votos contra 21,29%.

17. Alfonsín decía en un reportaje, acerca de la dirección del PJ: "es la línea que no ha entendido la revalorización de la democracia. Su prádica es insincera y calumniosa y apela a metodologías de agresión. Hacen un análisis de la realidad absolutamente falso. Están hablándole a un país que ya no existe.(...) Yo lamento las brechas actuales porque allí se filtran las minorías que terminan por utilizar a los militares como brazo armado de un esquema de dominación social" (*Clarín*, 28-10-83).

18. Uno de los principales ideólogos del alfonsinismo afirmaba por entonces que "la democracia es un proceso de constitución social y cultural autónomo de la economía" (J.C.Portantiero, redactor de discursos para Alfonsín, en *Entre dichos* Nro.7). Las mencionadas política e ideología abstractamente democratizantes son definidas en esta cita del sociólogo alfonsinista: esencialmente, se definen por hacer abstracción de los contenidos de clase. Una inmensa corte de intelectuales socialdemócratas (J.C.Portantiero, E.De Ipola, E.Vazquez, F.Delich, Pacho O'Donnell, el mismo R.Terragno) y publicaciones (*Entre dichos*, *Punto de Vista*, *Debates*, *Espacios*, *Crítica y Utopía*, *Nueva Sociedad*, *La Ciudad Futura*) repitieron ideas semejantes hasta que la crisis del alfonsinismo comenzó a disgregarlos.

19. En las elecciones de 1983 el PJ había obtenido parejo caudal de votos en los tres niveles de la elección (nacional, provincial, local). La UCR, en cambio, obtuvo más

adhesiones para su candidato presidencial (un 50%, contra un 48% para diputados y un 32% para gobernadores y senadores; mientras el PJ obtenía 39% para presidente y 38% para diputados, pero 54% para gobernadores y senadores). Es decir, el radicalismo tuvo mayoría absoluta en diputados (129/254, contra 111 del PJ), pero minoría en senadores (18/46, contra 21 del PJ) y en las gobernaciones (7/22) (DE RIZ, L.: Argentina: el comportamiento electoral durante la transición democrática (1983-1990), CEDES/41, Bs.As., 1990).

20. Entendemos por "politicismo" el predominio otorgado a la política haciendo abstracción de los intereses de clase en juego en la economía. La relación que la economía del tecnócrata Sourrouille establecería con la política sería el centro de este politicismo. Las condiciones para realizar una "política de inflación neutral" eran, para Sourrouille, una tarea de políticos. "Si surgen nuevos conductores para ofrecer a la Argentina una alternativa viable, tal vez el agotamiento de la política económica de impasse les permita obtener el apoyo popular para llevar a cabo algo parecido al programa que expusimos en estos capítulos", concluía ya en 1973, Sourrouille, su clásico texto (SOURROUILLE, J.V./MALLON, R.D.: La política económica en una sociedad conflictiva, Bs.As., Amorrortu, 1973, p.268-9).

21. Se trataba de una profunda crisis: el PBI de 1983 era igual al de 1975. La inversión bruta de 1983, un 25% inferior a la de 1975. El ahorro interno cae a un 11% del PBI, contra 21% en los años 70. El déficit fiscal de 16,4% del producto era superior al de 1975. El déficit de la cuenta corriente del balance de pagos era superior a los 2400 millones u\$s (a pesar del superávit de 3300 millones del balance comercial, debido al endeudamiento externo). Los intereses de la deuda representaban un 69% de las exportaciones para 1983, contra menos de 15% para 1975, la deuda neta un 70% del PBI anual y servicios financieros un 8% del mismo (DAMILL, M./FRENKEL, R.: La economía argentina en la década de los ochenta, Bs.As., CEDES/46, 1990). Sin embargo, los salarios habían recuperado los niveles de 1974 (46% sobre el promedio para 1976-83) y se indexaban automáticamente con la inflación (que alcanzaba un 15% mensual). Esto es muy importante para entender el auge posterior de las luchas obreras contra los shocks que volverían a deprimir los salarios.

22. Durante 1984 hubo una inflación acumulada de 688% (IPC, año base 1974), una reducción del déficit de la tesorería a través de una reducción de gastos con ingresos estables, un incremento del PBI del 2% y del consumo del 6,5%, una caída de las inversiones del -18,2% y de las exportaciones del -1,1% y un aumento de las importaciones

de 2,9%. El desempleo fue del 3,6% (al 10-84) y el salario real medio del trabajador industrial aumentó un 24%, siempre en relación a 1983 (los datos sobre estas variables son del *Informe Económico de Coyuntura* del CPCE y los correspondientes a conflictos obreros de *El bimestre* del CISEA).

23. Ver GIGLIANI,G.E.: La economía política de Alfonsín: ¿ajuste o modernización?, en Cuadernos del Sur Nro.10, Bs.As., 1989, p.43 y ss., para un análisis del Austral.

24. Los resultados de las elecciones de 1985 en diputados fueron los siguientes: UCR 43%; PJ 34,4%; Derecha y partidos provinciales 10,7% e Izquierda y Centro-izquierda 10,2%.(en *La Nación*, 3/10/93) La UCR conservaba sus 129 bancas, pero el PJ -dividido entre renovadores y ortodoxos- perdía 10 bancas. La dispersión del voto, inherente a las legislativas, condujo la polarización del 85,96% en 1983 al 77,4%, favoreciendo a los partidos provinciales, al PI y a la UCeDé. 25. El pago de servicios de la deuda crecería de u\$s 3.523 millones en 1984 a 4.583 millones en 1985, mientras la caída en los términos de intercambio implicaba -en relación a los precios de 1980- pérdidas de 2.963,4 millones para 1985, de 3.830,9 para 1986 y de 2.531,2 para 1987. Las presiones que la deuda externa ejerce sobre la economía son indiscutibles. Sin embargo, la deuda es esencialmente un problema interno de la economía argentina y es la gran burguesía monopolista local la principal beneficiaria de su pago -esto adquiere fundamental importancia a la hora de determinar cuáles son las principales clases dominantes de nuestra sociedad y de diseñar estrategias políticas para enfrentarlas. Ver GIGLIANI,G.E.: Si el austral lo llenó de tensión, su éxito lo dejará sin aliento, en: *Consignas* Nro.1, Bs.As., 1987, p.12.

26. Los resultados de las elecciones de 1987 en diputados fueron: PJ 42,2%; UCR 36,7%; Derecha y provinciales 12,8%; Izquierda y Centro-izquierda 6,8%. La UCR retrocedió a 114 bancas perdiendo la mayoría absoluta y el PJ aumentó a 106. El PJ ganó a la UCR 5 de las 7 provincias que había obtenido en 1983, además de conservar las que tenía. La UCR mantuvo sólo Córdoba y Río Negro, perdiendo Buenos Aires en manos de la renovación peronista y apareciendo Cafiero como principal referente del PJ; pero en las internas de Julio de 1988 -las primeras desde la constitución del peronismo- Cafiero perdería frente al menemismo por 53,44% contra 45,82%. Por su parte, a raíz de su triunfo en Córdoba, Angeloz aparece como el nuevo referente de la UCR. La polarización se

mantiene en un 78,9% y la dispersión del voto favorece a la UCeDé -que pasó de un 3 a un 6%- y a los partidos provinciales.

27. Los resultados de las elecciones de 1989 para presidente fueron: PJ 47,36%; UCR 36,4% (apoyado por la CFI, que obtuvo el 4,55%); UCeDé 6,27%; Partidos provinciales 3,5%; IU (FRAL-MAS) 2,48% y US 1,31%. Para diputados fueron: PJ 45,7%; UCR 32,6%; Derecha y provinciales 11,8%; Izquierda y Centro-izquierda 6,7%. Menem ganó con el voto de los "sectores bajos estructurados" y "bajos no estructurados/marginales" (52% y 72%, respectivamente, contra 34% y 20% para la UCR), mientras que la UCR ganó en "alto" y "medio alto" (48% y 53%, respectivamente, contra 23% y 27% para el PJ). La conformación de la cámara quedó con 120 bancas para el PJ (incluido el posterior grupo disidente de los 8), 90 para la UCR, 11 para la UCD, 2 para el PI, 31 para otros (incluidos los provinciales y 10 de izquierda y centro-izquierda). La polarización siguió disminuyendo afirmando la tendencia hacia la derecha que llegó a capitalizar el 72% de la dispersión del voto.

28. La campaña electoral había sido financiada por 23 empresas líderes, que gastaron un total de u\$s 12 millones. Muchas de ellas resultarían beneficiadas en las licitaciones de empresas públicas, como Bunge y Born (Gas Pampeana y Gas del Sur), Techint (Aceros Paraná, ex-Somisa), Astra, Sociedad Comercial del Plata (Telefónica Argentina, Aguas Argentinas), Benito Roggio e hijos (*Clarín*, 4 y 10/10/93). Los guiños del presidente resultaban creíbles para la gran burguesía. Por otro lado, Menem acordaría la transición con los "capitanes de la industria" (el "grupo María") en las oficinas de Bunge y Born: N.Rapanelli (BB), V.Orsi (SADE), S.Bagó (Lab.Bagó), M.Blaquier (Ledesma), R.Gruneisen (Astra), R.Bulgheroni (Bridas), R.Clutterback (Alpargatas) y M.Madanes (Fate-Aluar) (*El cronista comercial*, 20-9-88).

29. Ver SMITH,W.C.: Estado, mercado y neoliberalismo en la Argentina de la postransición: el experimento de menem, en *El cielo por asalto* Nro.5, Bs.As., 1993, p.61 y ss.

30. *La Nación* (15/4/90) calcula los resultados del ajuste en una caída del salario real en el sector público de 52% entre Diciembre del '88 y Marzo del '90, en maestros un 32% y en jubilados un 68%. La participación de los salarios del sector público en el PBI fue del 12% para 1987 y del 6% para 1990.

31. Ver ASTARITA,R.: Plan Cavallo y ciclo de acumulación capitalista, en este número de Cuadernos del Sur.

32. Los resultados de la elecciones 1991 en diputados fueron: PJ 38,95%; UCR 27,42%; Derecha y provinciales 20,62%; Izquierda y Centro-izquierda 4,7%. El PJ pasaría a tener 118 diputados mientras que la UCR continuaría disminuyendo sus bancas hasta 84. El PJ gana además en 15 provincias, la UCR en 3 y los partidos provinciales en 5 (La Nación, 3/10/93).

33. Los resultados de las elecciones de 1993 fueron: PJ 42,3%; UCR 30%; Derecha y provinciales 20,1% (incluyendo al MODIN que con un 5,8% pasó de 4 a 7 bancas del 91 al 93); y la Izquierda y Centro-izquierda 4,1%. El PJ, con un amplio triunfo a nivel nacional con gran diferencia en Buenos Aires y con un histórico triunfo en Capital Federal, pasó a tener 126 bancas. La UCR decayó una vez más a 83.

34. Datos sobre privatizaciones y reforma impositiva de FANELLI,J.M./FRENKEL,R./ROZENWURCEL,G.: Transformación estructural, estabilización y reforma del estado en la Argentina, Bs.As., CEDES/82, 1992.

35. Ver ZAMBONI,H.: Flexibilidad laboral: desandar la historia, en Cuadernos del Sur Nro.15, Bs.As., 1993.

36. Resulta esclarecedor, al respecto, el comentario que las designaciones de Menem merecían en un periódico del PJ: "en el área económica, es obvio que el Presidente ha hecho gala de un gran pragmatismo, el país, empobrecido y sin divisas, necesita buscar una convergencia de capitales y sectores de la producción, a fin de poner en marcha la necesaria Revolución Productiva." Y más adelante: "se agrega a esto otro pilar fundamental, como es el pacto social, en el que los trabajadores, empresarios y Estado, tendrán que compatibilizar intereses sectoriales en función del bien común, no importa tanto quién es el ministro de Economía, lo importante es que haga buenos negocios para la Argentina. Fue el propio Perón, después de todo, quien dijo que, "a veces, hay que tragarse algunos sapos" (*Proyecto nacional* Nro.1, del caudillo Quindimil). Esto pone de manifiesto la cohesión del PJ en torno del menemismo y que, aún personajes ex-montoneros como P.Bullrich, renovadores como J.L.Manzano y C.Grosso, desempeñen diversas funciones en el gobierno.

37. Nos referimos a una peculiar modalidad de conducción política, semejante a la de otros caudillos pertenecientes a los clanes familiares que controlan casi exclusivamente las provincias medianas y pequeñas (los Bravo de San Juan, los Sapag de Neuquén, los Saadi de

Catamarca, los Rodríguez Saa de San Luis, los Cornejo de Salta, los Guzmán de Jujuy, los Romero de Corrientes, etc.). Menem desarrolla en el gobierno varias conductas típicas de estos caudillos provinciales (el nepotismo, por ejemplo, designando cerca de 20 miembros de su familia en funciones públicas). Pero esto no significa que su poder político como presidente sea excesivo, como lo muestran las sucesivas intervenciones de Cavallo (con peso propio y apoyado por la burguesía en su conjunto y los EEUU) en las internas del gobierno (*Noticias*, 3/5/92 y 29/3/93).

38. La idea de que la corrupción constituye una cuestión meramente moral o jurídica es masivamente compartida por los analistas políticos. M.Grondona (periodista autor de un best seller sobre el tema) declara que "eliminarla del todo sería imposible, pero se puede bajarla a niveles que permitan el funcionamiento del sistema" -cuando "el sistema" funciona precisamente gracias a la corrupción. Moreno Ocampo (Fiscal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal Federal -fraudes contra el Estado- y director de un programa para el control de la corrupción organizado por una agencia yankee) advierte en la misma línea que "hay organismos internos del Poder Ejecutivo como la Auditoría General y la Sindicatura de Empresas Públicas que controlan los fondos y organismos externos como son los tribunales, además del control político que tiene que hacer el Congreso. Si estos controles funcionan tienen que detectar los casos de corrupción que existan" -mientras que la propia división de poderes resulta completamente disfuncional para la implementación de la política menemista (*La maga*, 31/3/93 y *Noticias*, 30-6-91) 39.

Riki Maravilla, precandidato por Salta, explicó su candidatura en términos claros: "no hay una cabeza visible, querible, dentro del justicialismo. No hay alguien que sea convocante y que el pueblo crea en esa persona. En Salta están un poco descreídos de los políticos que tanto han prometido y luego de las elecciones han hecho oídos sordos" (*Noticias*, 7-2-93).

40. Como puede verse en la evolución del voto para diputados (y constituyentes de 1994):

	1983	1985	1987	1989	1991	1993	1994
UCR:	48,0%	43,6%	37,3%	33,1%	29,1%	30,0%	19,9%
PJ :	38,6%	34,9%	42,9%	46,4%	40,4%	42,3%	37,6%

La UCR contribuye así, con su propia desintegración, a reafirmar al menemismo como único referente político capaz de llevar a cabo la reestructuración capitalista.

41. Los obreros industriales perderían peso en términos relativos y absolutos dentro de la sociedad (se redujo su número en un 40% entre 1974 y 1983). Los salarios reducirían en 12,8 puntos su participación en el PBI entre 1975 y 1983, iniciando una tendencia declinante sin retorno. Por otro lado, alrededor del 50% de las 7.261 personas desaparecidas desde 1976 hasta 1982, computadas en un informe de Enero del 83, eran obreros.

42. La evolución electoral de la izquierda clasista fue la siguiente, en cantidades de votos. En 1983: MAS 42.359 y PO 13.728. En 1985: FrePu (MAS-PC) 317.802 y PO 46.818. En 1987: MAS 227.326; FRAL 224.692 y PO 42.679. En 1989: IU (MAS-FRAL) 528.954 y PO: 36.060. En 1991: MAS 138.600, FRAL 86.525, PO 43.834 (La Nación, 14/5/89 y Prensa Obrera, 19/9/91). Tras un período de crecimiento entre 1985 y 1989, la izquierda obtiene un diputado nacional (L.Zamora del MAS), uno provincial (S.Díaz del MAS), y tres consejales. A este crecimiento electoral del período debe agregarse su influencia en algunos sectores del trabajo (UOCRA-Neuquén, Sanidad, Ferroviarios, Docentes, etc.).

43. Datos de la UNICEF. La reestructuración capitalista provoca también una "tercermundialización" de los países capitalistas centrales, en los que podemos apreciar un creciente desempleo (entre un 10 y un 15%), una mayor concentración de la riqueza (por ejemplo, el 1% de las familias norteamericanas tenía el 37% de la riqueza después de Reagan) y alrededor de 200 millones de personas sufren hambre (ver MANDEL,E.: Balance del neoliberalismo, en Dialéctica Nro.3/4, Bs.As., Octubre de 1993).

44. En este contexto, consignas como la de "capitalismo serio" o "capitalismo a la sueca" -defendiendo la necesidad del ajuste- de Chacho Alvarez son ilusiones que eliminan al Frente Grande como alternativa a la reestructuración menemista. Su carácter de clase se manifiesta claramente al votar junto a los pactistas la intervención contra la insurrección popular de Santiago del Estero.